

Los lentes de Víctor Hugo

Transformaciones políticas y desafíos
teóricos en la Argentina reciente



Eduardo Rinesi
Gabriel Nardacchione
Gabriel Vommaro
(editores)



Universidad
Nacional de
General
Sarmiento

prometeo
libros

NOTAS SOBRE LA DEMOCRACIA, LA REPRESENTACIÓN
Y ALGUNOS PROBLEMAS CONEXOS

Eduardo Rinesi
Gabriel Vommaro

El problema de la “crisis de la representación” tiene ya una larga presencia en la, como se dice, “agenda” de nuestras ciencias sociales y políticas. No hay duda de que las transformaciones en el mundo de la producción, de la sociabilidad y de la cultura en los países capitalistas avanzados, y los fuertes impactos que todos esos cambios han producido sobre los modos en que la filosofía social de esos países viene tematizando desde hace varias décadas la vida política, han contribuido a hacer de ese tópico, desde hace tiempo, un lugar común del pensamiento académico que solemos frecuentar y consumir. No hay duda tampoco de que en los países capitalistas periféricos en general, y en el nuestro en particular, la cuestión de la “crisis de la representación” ha encontrado un campo fértil para desarrollarse al compás de la reflexión sobre las transformaciones en las identidades sociales, políticas y culturales operadas desde mediados de la década del 70. No es extraño, en consecuencia, que el problema haya venido ocupando un lugar significativo, y cada vez mayor, tanto en la ciencia política como en el ensayo social y en la discusión periodística, en los debates argentinos *anteriores* a los decisivos acontecimientos que sacudieron el país en el mes de diciembre de 2001, hasta el punto de que puede afirmarse que, en el año o par de años inmediatamente anteriores a esos acontecimientos, el tema de la “crisis de la representación” se había vuelto un problema recurrente del pensamiento social y político argentino. Sin embargo, son sin duda la fuerza, el dramatismo y las vastas consecuencias de esos sucesos los que en el cur-

so de los últimos años dieron a ese ya transitado debate una renovada urgencia e interés, que por lo demás no han dejado de acrecentarse a la luz del derrotero que siguió, después, la vida política argentina. En las notas que siguen, nos gustaría considerar algunos de los elementos que, nos parece, deben ser tenidos en cuenta en un tratamiento actual de ese problema, y de los desafíos que el mismo le plantea al pensamiento teórico sobre la política en la Argentina actual.

1. REPRESENTACIÓN, PARTICIPACIÓN, LEGITIMIDAD

Los trabajos de José Nun se cuentan sin duda entre las contribuciones más estimulantes al debate teórico-político sostenido en la Argentina durante los años de lo que se dio en llamar la “transición democrática”, o la “transición a la democracia”. En ellos Nun solía hacer notar¹ que la metáfora de la “transición” implicaba la más o menos clara caracterización de un cierto “lugar” o “puerto de arribo” *hacia el cual* –según aquellos que la utilizaban– se habría estado entonces “transitando”, y se preguntaba por las características que tenía ese modelo de punto de llegada del proceso que esa metáfora permitía, de manera estilizada, caracterizar. Apelando a la idea de “parecido de familia” (¿al sistema político *de qué país o de qué tipo de países* se “parecía” el modelo que de manera más o menos tácita se tenía en mente cuando se delineaba el plan maestro de la *transición*?, ¿qué tipo de modelo, de ideal regulador, de utopía, se perseguía?), Nun observaba que los rasgos del tipo de sistema que los discursos políticos y académicos dominantes de la “transición” ponían como modelo de llegada del pro-

ceso eran los del sistema político característico de los países del cuadrante noroccidental del planeta, es decir, los de un puñado de “democracias liberales”, o de “liberalismos democráticos”, que, de hecho –como observaba Nun con toda razón–, eran y son *bastante más liberales que democráticos*. La distinción entre uno y otro de estos dos tipos de modelos (demasiado a menudo desconsiderada, *lo que por cierto constituye una demostración cabal del triunfo ideológico del liberalismo* como paradigma dominante en la manera en que, dentro y fuera de la academia, nos hemos habituado a pensar la política y la propia democracia) es ciertamente crucial. ¿En qué consiste? Para no abundar, en que mientras la tradición *liberal* enfatiza la centralidad del valor de la *representación política*, y –de ahí– del establecimiento de lazos verticales entre los ciudadanos y las instituciones del Estado (los ciudadanos son “representados” por el Estado, el cual, en contrapartida, les garantiza cierto conjunto mínimo de derechos), la tradición *democrática* destaca la importancia del valor de la *participación popular, deliberativa y activa*², en los asuntos públicos, y, en consecuencia, auspicia el establecimiento de lazos horizontales de los ciudadanos entre sí.

Claro que las cosas no son nunca tan blancas ni tan negras. Y lo que Nun señalaba con frecuencia en sus trabajos de los años 80 era precisamente que el tipo de “democracias liberales” (“o, según me parece más riguroso decir, [de] liberalismos democráticos” [Nun, 1991: 1]) en los que los procesos de “transición democrática” latinoamericanos habían elegido mirar el rostro de su propio futuro tenían “bastante más”, digamos así, de liberalismo (de representación, de verticalidad) que de democracia (de participación, de relaciones horizontales entre los ciudadanos). Pero que, en cualquier caso, ese “liberalismo democrático”, como modelo de “puerto de llegada” de los procesos de “transición”, era una suerte

¹ Ver por ejemplo, Nun, 1987 y 1991, y una sistematización de las mismas ideas en Nun, 2000.

² Cf., sobre esto, Pateman, 1985.

de "mix" de instituciones y de prácticas (un *mix* no armónico, evidentemente, sino lleno de conflictos y de tensiones) provenientes de una y otra de esas tradiciones filosóficas, teóricas y políticas. Que no sólo no son coincidentes –insistimos–, sino que tampoco están llamadas a encontrarse de modo inexorable. Más: que sólo trabajosa y artificiosamente *pueden*, eventualmente, hacerse converger. De hecho, puede postularse que la historia argentina anterior a 1983 había sido la de un largo fracaso, una prolongada frustración del intento de consolidar un campo donde estas dos tradiciones pudieran conciliarse. Que los progresos de los componentes "democráticos" y "liberales" en la configuración de los espacios públicos en la Argentina se habían logrado siempre, hasta entonces, unos a expensas de los otros, y que una de las mayores novedades del proceso inaugurado en nuestro país en ese año consiste precisamente en el ensayo de apuntalar un espacio donde pudieran converger *a un tiempo* los principios y los valores del liberalismo y de la democracia. La cuestión es *cómo* se hizo esto.

Y es aquí donde debe apuntarse uno de los rasgos más singulares del proceso de la "transición" argentina. En los liberalismos democráticos consolidados, el componente "liberal" precedió y habilitó su (ulterior) complemento "democrático"; el ámbito en que se hizo posible la conciliación entre ambas tradiciones fue, como en su momento destacó C. B. Macpherson y como insistía igualmente Nun en los escritos que aquí estamos recordando, *primero* liberal y *después* democrático. La participación popular se extendió cuando ya no constituía una amenaza para las instituciones de la representación política y del Estado liberal. El liberalismo actuó allá, en fin, *como piso* o –mejor– como *punto* hacia la conquista de valores democráticos que se le fueron imponiendo, diríamos, "desde fuera". En la "transición democrática" argentina, en cambio, la democracia –como tópico discursivo y como principio orientador de las prácticas políticas– *precedió* al componente liberal, por así decir, *como una coartada*. Preferimos esta metáfora de

la "coartada" a la figura más nítida de una "mascarada" o una simple "mentira" que habría "escondido" algo así como una "verdad última" que no se nos permitía ver, ya que lo que estamos tratando de insinuar es que el proceso de la transición democrática argentina tuvo más bien un cierto carácter tortuoso, y que, en él, el componente "democrático" del discurso y de las prácticas políticas parece haber actuado en el sentido de contribuir a generar un "entusiasmo", una "pasión" ("nada puede hacerse en la historia sin pasión", decía el viejo Hegel) *necesaria para dar fuerza al impulso de consolidación de un cierto sistema de reglas de juego*, pero que fue desapareciendo de esos discursos y de esas prácticas cuando dejó de constituir un aval y empezó a ser percibido como un desafío a esa misma consolidación.

Así, siguiendo un itinerario *exactamente inverso al camino "incrementalista"* que había caracterizado la siempre conflictiva relación entre el principio liberal de la representación y el principio democrático de la participación en las democracias liberales consolidadas del Noroeste del planeta, en nuestro proceso de "transición democrática" de los años 80 parece haberse verificado una parábola que llevó a la política desde un "coqueteo" intenso, *en el comienzo del ciclo de la "transición"*, con formas, prácticas y discursos asociados a las tradiciones democrático-populares argentinas (convocatorias a la Plaza de Mayo, invitaciones a "abrir las puertas de casa y salir a las calles", aliento a formas diversas de "participación" popular en los asuntos públicos), hasta la consolidación, *al final del ciclo de la transición*, de una democracia fuertemente *liberal*, desestimulante de la participación popular y asociada en cambio al ejercicio, por parte de los *representantes* del pueblo, de su (liberal, anti-democrático) derecho a "deliberar y gobernar" *en nombre* de éste, que en el ínterin había sido desplazado –no siempre con elegancia, como por lo demás veremos enseguida– del centro de la escena. Cuando en 1993, diez años después del fin de la dictadura militar, los dos máximos líderes políticos de la década sellaron a solas y en secreto el pacto que ha-

bría de definir el destino de la política argentina de los años siguientes, uno de ellos dijo que ese pacto cerraba el ciclo de la "transición". *Y tenía razón*: el "pacto de Olivos" constituye la culminación de ese ciclo de la transición democrática en el doble sentido de que constituye el hecho que *pone fin* a ese ciclo y de que constituye también *la culminación lógica* del tipo de evolución política que lo había caracterizado. Que era entonces, resumiendo, la evolución desde el énfasis —necesario pero transitorio— en el "polo" democrático de la unidad "democrático-liberal" que se pugnaba por forjar, hacia el triunfo final del "polo" liberal de esa "unidad", de ese "mix". De la participación a la representación. Del estímulo al involucramiento de la ciudadanía en la vida pública al impulso a la diferenciación, a la *separación*, entre los representados y los representantes. De una visión de la democracia como gobierno *del* pueblo y *por* el pueblo hacia una visión de la democracia como gobierno *para* el pueblo, sí, pero llevado adelante por aquellos que pueden y deben "deliberar y gobernar *en su nombre*", lo más lejos posibles del control de los ciudadanos, y, en el límite, negociando a solas y en secreto su futuro. No puede llamarnos la atención que por entonces haya comenzado a ganar espacio en el lenguaje político, periodístico y cotidiano, la idea de los políticos como miembros de una "clase", la "clase política": un grupo *separado* de la sociedad que progresivamente comenzaría a volverse extraño a ella.

Lo que quizás nos permita aclarar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de "crisis de la representación". Porque, en efecto, si lo que hemos dicho es cierto, resulta que la tan mentada *crisis de la representación* no implica una crisis del principio de la representación (*es decir*, de la separación) como principio organizador de la vida política, *sino, exactamente el revés, su pleno triunfo*, su perfecta apoteosis. En efecto: lo que suele llamarse "crisis de representación" implica en realidad la idea de que *solamente* hay, en la relación entre representantes y representados, ese lazo vertical y distanciador que es la representación (que, como Roberto Gargare-

lla, por ejemplo, ha explicado muy bien, *no es* el puente gracias al cual todos nosotros, *de alguna manera*, participamos en el gobierno "a través" de nuestros representantes, sino *el foso* en virtud del cual ninguno de nosotros participa ni puede participar, *de ninguna manera*, en ese gobierno)³, *no corregido, relativizado ni compensado* por ninguna forma de participación popular, de control ciudadano, de "accountability vertical"⁴, de interacción entre representantes y representados, de intervención efectiva de estos últimos en las discusiones acerca de los problemas que les conciernen. Por eso, quizás convendría hablar, cuando se quiere aludir a este fenómeno que suele designarse como "crisis de la representación", de algo que acaso sea ligeramente distinto: de "crisis de *representatividad*". De una pérdida de *legitimidad* de ese lazo de representación. De un deterioro —para decirlo de otro modo— de la creencia en la justicia, la razón o aun la conveniencia de que nuestros representantes estén separados de nosotros, creencia que, cuando existe, se sostiene sobre la impresión, la sensación o la seguridad de que esos representantes nuestros tienen *algo que ver* con nosotros, de que son *representativos* de nuestros propios valores, de nuestras propias posiciones y expectativas, y de que están allí donde nosotros los hemos puesto a través de nuestro voto y de nuestra confianza para realizar esas expectativas mejor que lo que nosotros mismos podríamos hacerlo, y por lo tanto de que pueden ser *buenos* representantes nuestros y de que "está bien", por así decir, que nos representen.

Ahora bien: ¿cómo se genera esa impresión, esa sensación o esa seguridad de que esos representantes nuestros tienen *algo que ver* con nosotros, de que de algún modo *expresan* nuestras propias necesidades, nuestros anhelos y nuestros intereses, de que son, en fin, *representativos* de las posiciones de las que participamos y de que, por lo tanto, podemos *confiar* en ellos? En este artículo sosten-

³ Cf. Gargarella, 1995.

⁴ La referencia aquí, por supuesto, es a O'Donnell, 1997.

dremos la hipótesis de que *la palabra* de los representantes del pueblo o de los que aspiran a convertirse en tal cosa (*la palabra*: su capacidad para articular discursivamente ideas, sentimientos y propuestas, diagnósticos, programas y justificaciones de esos programas, argumentos, compromisos y promesas⁵) constituye un elemen-

⁵ Esta idea de "promesa" nos permite situar una dimensión fundamental del lugar de la palabra en la política. En efecto, por un lado, las promesas definen una dirección, un lugar hacia el que se dirige la acción política presente. O, por hablar como los fenomenólogos, un "horizonte" que define el sentido de la práctica actual y que requiere ser hablado y actuado. Por otro lado, las promesas permiten, como decía Hannah Arendt, "disponer del futuro como si fuera el presente... milagrosa ampliación de la propia dimensión en la que el poder puede ser efectivo" (Arendt, 1993: 264), en virtud del establecimiento de un compromiso que genera ciertos "islotos" de certeza en medio de la incertidumbre propia de la acción política. Las promesas pueden estar ligadas al bienestar individual, a la justicia social, al orden, a la pacificación o a lo que fuere, y pueden encarnarse en la democracia como forma de vida en común (como la promesa alfonsinista), en la estabilidad de la moneda (como la de Menem y la de la Alianza), en la defensa de "los intereses del pueblo" (como parece sugerir la promesa kirchnerista), etc. El tema tiene una cantidad de aristas imposibles de examinar aquí, pero no querríamos dejar de decir, brevisísimamente, dos cosas. La primera es que las promesas que aquí nos interesan tienen una *decisiva dimensión colectiva*. En efecto, aun cuando alguno(s) las hace(n) y otros la toman, tanto uno(s) como otros están atados a ellas, comprometidos con ellas, y es *precisamente por ello* que pueden, como decíamos, definir un horizonte y establecer un compromiso, horizonte y compromiso que delimitan el propio territorio de la vida política en un lugar y en un momento dados. La segunda es que cuando decimos "promesa" no estamos pensando (o sí, pero sólo como un caso, y un caso que no es de los más interesantes) en las así llamadas "promesas de campaña". Las promesas a las que aquí aludimos son menos esas promesas generalmente estridentes y excesivas (que por lo demás todo el mundo decodifica como lo que son: partes de una estrategia de seducción de un electorado) que los diversos compromisos que un conjunto generalmente mucho más amplio y complejo de operaciones discursivas (y no sólo discursivas, desde ya) de un equipo gubernamental va forjando (y no tanto *antes* cuanto *durante* la propia acción de gobernar) con la ciudadanía. Así, por ejemplo, nadie diría que la "promesa alfonsinista" a los ciudadanos argentinos haya sido *realmente* lo que pretendía aquella efectiva consigna según la cual "con la democracia se come, se educa y se cura". Sobre todo si se recuerda que Alfonsín, ya instalado en la presidencia, se cansó de acusar de "antidemocráticos" (con no poco consenso, por lo demás) a quienes protestaban en las calles o en las plazas porque pretendían comer demasiado, educar en exceso o curar más de la cuenta, poniendo en peligro de ese modo –según explicaba– la estabilidad misma del sistema. Si hubo una "promesa alfonsinista", entonces, no fue la de que con la democracia podría comerse, educarse y curarse, sino la de que, para usar otra famosa frase de esa década, *nunca más* dejaría de haber democracia en la Argentina, y la de que el gobierno haría todo lo necesario (incluidas, por cierto, todas las *concesiones* necesarias, que cuando se producían *encontraban justamente en esa promesa su justificación*) para garantizarlo. Y otro tanto podría decirse, evidentemente, de la promesa de Menem de hacer la "revolución productiva", o de la promesa de la Alianza de combatir la corrupción: está (está hoy y estaba entonces) claro que, detrás de su aparatosa "promesa de campaña", lo que Menem prometía –lo que Menem no dejó de prometer a lo largo de los diez años de su mandato– era *previsibilidad monetaria y dólar barato*, y está (está hoy y estaba entonces) igualmente claro que, detrás de su antimenemismo superficial, lo que la Alianza prometía era... *previsibilidad monetaria y dólar barato*. Pero no nos adelantemos.

to de vital importancia en la construcción de esa confianza, en la configuración de esa relación de –digamos– representación "legítima", *representación representativa*, cuya crisis es, según estamos sugiriendo, aquello que mentamos cuando hablamos de "crisis de la representación", y aquello cuyas causas y cuyas consecuencias estamos tratando de explorar. La palabra, entonces, como factor fundamental en la configuración de un lazo de representación representativa, legítima, entre los representantes y los representados de una democracia liberal: ésta es nuestra primera hipótesis. La segunda, complementaria, es que esa palabra, para poder cumplir adecuadamente esa tarea de volver legítimo un cierto modo de ejercicio del poder político, debe por su parte dialogar con (interpelar a, hacerse carne en) un público movilizado y activo, una ciudadanía organizada y crítica, que se reconozca en ella, la *tome* y la arraigue en el movimiento vivo de la historia.⁶ Pero vamos por partes.

⁶ Es interesante, equívoca y bella esta expresión, "tomar la palabra". La misma nos remite por supuesto al precioso título de un clásico libro de Michel de Certeau, *La toma de la palabra*, acerca del mayo francés (De Certeau, 1995), que se citó generosamente en los distintos ensayos de interpretación del diciembre argentino que circularon entre nosotros y que inspiró incluso el título de un sugerente libro colectivo sobre el particular (nos referimos a Schuster y otros [comps.], 2005), y nos permite pensar en las distintas posiciones y actitudes que adopta frente al otro el individuo o el pueblo que (le) toma la/su palabra. En efecto: "Tomar la palabra" del otro significa sin duda hacerla propia, reconocerse en ella, responder a su interpelación, hacerla carne en uno, volverse sujeto por mediación de esa palabra que nos habla y que "tomamos". Pero *tomarle* la palabra *al otro* significa también comprometerlo a cumplir lo que esa palabra (nos) promete: ya hemos hablado, en nuestra nota anterior, sobre la importancia de las promesas. Nos constituimos entonces como sujetos porque nos reconocemos en la palabra del otro, pero también porque el otro, a través de esa palabra, asume un compromiso con nosotros y *nosotros le tomamos la palabra, y estamos dispuestos a hacérsela cumplir*. Finalmente, decimos que alguien "toma la palabra" para indicar que *se pone a hablar* (en general, en un contexto en el que antes había estado hablando otro), y que un pueblo "toma la palabra" (casi como cuando otros pueblos, en *altri tempi*, "tomaron" la Bastilla, o el Palacio de Invierno...) cuando se convierte, a través de ese mismo gesto de ponerse a hablar o a gritar o a protestar, en dueño de su propio destino. Es a ese complejo, impreciso e inestable conjunto de significaciones de la expresión que dejamos estampada, "tomar la palabra", a lo que nos referimos cuando aludimos a la importancia de que la palabra de "los políticos" entre en diálogo con las fuerzas vivas de la historia.

2. LAS PALABRAS Y LAS CASAS

Nos gustaría introducir aquí, en esta segunda estación de nuestro viaje, algunas de las enseñanzas de un autor que habrá de acompañarnos a lo largo de todo este recorrido. Nos referimos a Oscar Landi, sin duda uno de los más agudos analistas del proceso político argentino abierto en 1983, quien, preocupado por el papel de los órdenes simbólicos en la vida pública, en la configuración de las formas de identidad, de subjetividad, de sociabilidad y de politicidad de las personas, y en el tipo de lazo que los ciudadanos establecen entre sí y con sus gobernantes, produjo una serie de relevantes consideraciones sobre el lugar de la *palabra* en la historia argentina en general, y, en particular, en la organización del espacio público nacional de los años de la “transición a la democracia”. Años, por cierto, de fuerte *centralidad de la palabra*, de *las palabras*, en la vida social y política argentina. En efecto: censurada, callada, silenciada durante los años de la dictadura militar, la palabra política reaparecía por entonces en la escena pública argentina (de la mano, por lo demás, de ese notable orador que fue el primero candidato y luego presidente Alfonsín) gozando de una renovada y amplia legitimidad. Lo cual es fácilmente comprensible: aquellos eran años de formulación de diagnósticos sobre el presente, de debates sobre programas y alternativas para el futuro y también —y unido a eso— de revisión crítica del pasado, y todos éstos eran desafíos que sólo podían encararse en el plano de la palabra, del discurso. Era allí, en el plano del discurso, donde debía dirimirse, por ejemplo, la discusión sobre el lugar del peronismo, el sindicalismo y la corporación militar en la historia argentina del siglo XX; era allí donde debían procesarse las luchas por el sentido mismo de la vida colectiva en esos años de la reconstrucción institucional; era allí donde se trataba de establecer un nítido corte con el pasado de autoritarismo, violencia y transgresión de las reglas de convivencia, un corte que evitara la repetición de ese pa-

sado no deseado; era allí donde Alfonsín buscó y consiguió presentarse a sí mismo como el garante de esa no vuelta del pasado.

Y fue también allí, en el terreno de la palabra, del discurso, donde, al servicio de esa idea de —como solía decir Alfonsín— “ponerle una bisagra a la historia”, el candidato radical produjo, a cierta altura de la campaña, lo que Landi llamó “el gran acontecimiento” de la misma: la denuncia de un supuesto pacto militar-sindical, que constituyó simbólicamente al peronismo en el lugar de la repetición, de lo imposible, de lo inviable, al tiempo que ponía al radicalismo del lado de la garantía —que la sociedad argentina parecía reclamar— de la ruptura con el pasado, de la garantía de que ciertos hechos de ese pasado que se trataba de dejar atrás no sucedieran “nunca más”. Por supuesto, el presunto “pacto militar-sindical”, si por tal cosa se entiende un acuerdo explícito entre militares y sindicalistas para gobernar el país según un esquema determinado, *no había existido, seguramente, jamás*, pero eso era menos importante que el modo en que su denuncia por parte de Alfonsín recogía cierto “clima de época”, cierta vocación colectiva de ruptura con el pasado, y que la eficacia con la que esa denuncia lograba enlazar bajo esa figura más o menos alegórica del “pacto” (pacto secreto, sospechosa conjura entre las sombras) a dos actores a los que no resultaba difícil identificar con algunas de las formas de ese pasado “no deseado” con el que se quería romper: la imagen de los militares —en efecto— traía la del golpe de estado y la violencia institucional; la de los sindicatos, la del desorden y la violencia patoteril. Digámoslo de nuevo: el famoso “pacto militar-sindical” *no existió probablemente nunca*, pero la importancia de que haya podido postularse y de que haya resultado verosímil radica en otra parte; lo que sostiene la verosimilitud de la denuncia de ese pacto probablemente inexistente es la fuerza *de otro pacto, tácito pero fundamental*, entre la dirigencia política y la ciudadanía. A ese pacto, a ese tipo de entendimiento, de acuerdo, de comunidad de objetivos y de expectativas, es a lo que aludíamos hace un momento

con la palabra *representatividad*. A ver si lo podemos decir de esta manera: Alfonsín, que nunca disimuló el clásico liberalismo que animaba su pensamiento político, que se pasó meses –por si alguna duda quedara sobre eso– recitando en cada acto político del que participaba el rezo laico del “Nos, los representantes...” del Preámbulo de la Constitución liberal de 1853, y que por cierto no fue nunca un demócrata entusiasmado con la idea de la participación popular en los asuntos públicos, consiguió ser un “representante del pueblo de la nación argentina” verosímil y *representativo* porque logró articular exitosamente (como diría un célebre príncipe danés: “palabras, palabras, palabras”: *pero es que es exactamente de eso de lo que se trata*) un conjunto de expectativas de una parte importante de la ciudadanía que se proponía representar.

Pero (volvamos sobre las dos hipótesis que dejábamos anunciadas al finalizar la sección anterior) no todo eran palabras –o, mejor, esas palabras no jugaban solas su rol fundamental– en la construcción del liderazgo alfonsinista y en la posibilidad del dirigente radical de generar un lazo de –como aquí estamos proponiendo– representación “representativa” con la ciudadanía argentina de esos años. Porque si eran en efecto esas palabras las que hacían aparecer a su enunciador en el lugar de la encarnación de una promesa de “corte” con el pasado en la que, por cierto, la mayor parte de la ciudadanía argentina lograba sin dificultad reconocerse, al mismo tiempo era la propia movilización de esa ciudadanía en contra de ese pasado y a favor de un conjunto de valores y de expectativas que el discurso de Alfonsín recogía y hacía suyos lo que sostenía y volvía potente y verosímil ese mismo discurso. Los recordados actos masivos que, ya desde antes de que comenzara la campaña electoral de 1983, y todo a lo largo de los años que seguirían, jalonan el proceso de construcción y consolidación del liderazgo alfonsinista, no constituyen el puro resultado de su demiúrgica capacidad para –permítasenos un chiste tonto– “hacer cosas con palabras”, sino el resultado de un encuentro entre su ha-

bilidad para “dar voz”, para dar *palabras*, a una serie de expectativas populares y la fuerza de la *movilización* popular que sustentaba y *daba vida* a esas palabras. La palabra de Alfonsín se hacía carne, por así decir, encontraba su efectividad y *se volvía propiamente política* en su encuentro con las multitudes movilizadas para oírlo, y es sin duda esta conjunción, este encuentro entre las habilidades oratorias del caudillo radical y la fuerza de una ciudadanía movilizadora y activa lo que está en la base del “fenómeno” alfonsinista.⁷ Otra vez nos sirve recordar a Landi, quien afirmaba que el tipo de relación que se establece entre un orador y un auditorio presente y activo configuraba “la forma privilegiada de comunicación política” de aquella época (Landi, 1985: 22), observación tanto más importante cuanto que esa forma privilegiada de comunicación política no tardaría en ser reemplazada por otras, bien distintas.

¿Cuándo ocurrió esto último? No de un día para otro, desde luego, pero no hay duda de que sí es posible establecer una suerte de punto de inflexión alrededor de los decisivos acontecimientos de la Semana Santa de 1987, que fueron por cierto objeto de sutiles análisis de Landi en más de un sitio.⁸ Los hechos son conocidos y recordados: después de tres días de fuerte tensión, frente a la asamblea popular que se había reunido en la Plaza de Mayo en respuesta al motín de un sector rebelde del ejército, Alfonsín anunció desde el balcón de la casa de gobierno que se disponía a dirigirse a la guarnición donde se habían atrincherado los militares sublevados, y pidió al pueblo reunido que lo esperara allí, en la plaza. Un rato más tarde, tras haber conversado personalmente con los amotinados, volvió a dirigirse a la ciudadanía desde el mítico balcón, esta vez para decirle que la casa estaba en orden y que no había sangre en la Argentina, y *para intimar a los presen-*

⁷ Sobre el significado de los actos del alfonsinismo en 1983, cf. Vommaro, 2006.

⁸ Para todo esto, ver especialmente Landi, 1988.

tes a que volvieran a sus casas a festejar las Pascuas en familia. Es imposible exagerar la importancia de este último pedido: desde el mismo balcón desde el que había pronunciado sus más recordados discursos, Alfonsín mandaba ahora a los manifestantes (a una ciudadanía movilizada que había mantenido la vigilia durante tres días) a sus casas. *En un mismo gesto vaciaba el balcón de palabras y la plaza de cuerpos:* los militantes políticos, sindicales y sociales ya no tenían nada que hacer allí, y a todos ellos empezó sin duda a ganarlos desde ese mismo instante la sensación de que ya no tenían nada que hacer –en un sentido más general– en la así reafirmada política de los representantes. Ése es sin duda el sentido más fuerte del movimiento entero que describe, vista en su totalidad, la convocatoria y posterior desmovilización de la ciudadanía en esa Semana Santa del 87: si al comienzo de la misma los ciudadanos que estaban en sus casas recibían desde la pantalla de sus televisores la urgente invitación a abandonar esa posición de puros espectadores y marchar hacia la Plaza, el domingo por la tarde, *en esa misma Plaza,* esos ciudadanos debieron oír del mismísimo Presidente de la Nación la invitación a abandonar ese espacio público y marchar disciplinadamente a casa. *De casa a la plaza y de la plaza a casa.*

Allí, de vuelta a casa, muchos de ellos deben haber encendido –previsiblemente– sus televisores, y deben haber podido ver allí, cubriendo íntegra la misma pantalla que dos días antes los había invitado a salir de casa y marchar hacia la plaza, una leyenda satisfecha: “Democracia para siempre”. Es imposible no formularse la pregunta por las características de esa democracia que sólo podía salvarse a costa del desestímulo a la participación ciudadana, dejando en todos la amarga sensación de que la aparente victoria sobre lo que el Presidente se obstinaba en llamar “el pasado” escondía en realidad una derrota muy severa. Porque, en efecto –y como Landi observó muy bien–, el discurso de Alfonsín no logró evitar, a pesar de sus intentos, la inquietante sensación de que ha-

bía habido algo más que una simple rendición de las armas en la reunión secreta en Campo de Mayo, de que el presidente había *negociado* con los militares sublevados (con lo que el pacto secreto volvía, en su peor forma, a la dinámica de la política argentina), y de que mientras los manifestantes eran invitados a desmovilizarse y a abandonar el espacio público de la plaza, las élites políticas y militares continuaban probablemente, de espaldas al pueblo, sus sigilosas conversaciones. Y, en efecto, la sensación de que mientras nosotros celebrábamos las Pascuas en el espacio privado de nuestros hogares esas conversaciones habían continuado tras las bambalinas del poder se volvió algo más que una sospecha a la luz de la sanción, poco tiempo después, de dos importantes leyes que buscaban limitar el juzgamiento de militares por sus crímenes durante la dictadura, y que habían sido la evidente prenda cedida por el poder civil para conseguir la deposición de las armas rebeldes.

Landi, como decíamos, daba una importancia fundamental a este hecho, y la razón se comprende muy bien: Alfonsín, que durante varios años había sostenido la credibilidad y legitimidad de su palabra ordenadora sobre la base –como dijimos– de la denuncia de un pacto oscuro y secreto que probablemente nunca haya existido, pero que, en cualquier caso, era, por así decir, “socialmente creíble”, ve bruscamente deteriorada esa credibilidad cuando no es capaz de desmentir de manera verosímil la existencia de *otro* pacto, igualmente secreto y ominoso, que se vuelve, en cambio, sospechoso de ocultar. Negando en vano un pacto que todo el mundo, con muy fuertes fundamentos, intuía, Alfonsín perdía así el lugar simbólico de garante de la ruptura con el pasado que había sabido conquistar con su denuncia del *otro* pacto: ése que, en cambio, nunca había tenido lugar. Así, en cierto sentido, puede afirmarse que la suerte de la palabra política del primer presidente del ciclo de la “transición democrática” argentina describe una especie de parábola entre su denuncia exitosa y verosímil de un pacto que nunca ocurrió y su fallido mentís de otro pacto del que

sobran motivos para sospechar. Un pacto –escribió Landi– estuvo en la base de su ascenso; otro pacto, en el origen de su declive. Porque, en efecto, es nada menos que el declive de Alfonsín lo que comienza con la pérdida de credibilidad de su palabra, en la medida en que una parte importante de su propia legitimidad como representante estaba –como ya dijimos– asociada al uso que él hacía de esa palabra. Y aquella legitimidad nunca pudo reponerse de este golpe. *Pero no sólo ella*: en la medida en que la palabra política de Alfonsín actuaba en esos años como la organizadora de todo un campo de discusiones y argumentaciones que, a favor o en contra, giraban sin duda alrededor de ese centro de gravedad y definían en relación con él sus posiciones, el deterioro de la credibilidad de la palabra política de Alfonsín hizo algo más –y algo más grave– que causar el comienzo del fin de la legitimidad del propio Alfonsín: cuestionó el valor de la palabra política en general, de la palabra política, diríamos, *como tal*. Y en esa misma medida (si tenemos razón en la hipótesis que hemos sugerido más arriba: la que dice que esa palabra política es fundamental en la gestación de las condiciones de una representación política legítima o “representativa”), infringió un golpe decisivo a la posibilidad misma de consolidar un liberalismo democrático creíble, estable y duradero en la Argentina.

Y más todavía: afectó decisivamente (ingresamos aquí a un tema sobre el que también Landi nos ha dejado textos importantísimos, pero que sólo podemos tocar muy lateralmente) las formas de espectacularización, las formas de “puesta en escena” de esa palabra política, y en particular las formas en las que esa palabra política se relacionaba y se relacionaría, desde entonces, con el mundo de los medios masivos de comunicación en general, y con la televisión en particular. En efecto: en el inicio del ciclo de la transición democrática, la televisión estaba fuertemente deslegitimada en la opinión pública como consecuencia de su notoria complicidad con la sistemática falsificación de la realidad operada por la dicta-

dura militar en ocasión de la guerra de las islas Malvinas, y no tenía mucho más remedio, ante la fuerte legitimidad que exhibía la palabra política de los dirigentes, que servir de puro “medio”, de pura “intermediaria” encargada de trasladar esa palabra de los lugares tradicionales de la enunciación política (el balcón, la calle, los estadios de fútbol o de box) al living de nuestras casas. Pero ahora, cuando desde el más tradicional de los escenarios de la palabra política el mismísimo Presidente de la República nos mandaba de vuelta a nuestras casas a festejar las Pascuas y, en la medida en que el desenlace de los acontecimientos que habíamos protagonizado durante cuatro días en la Plaza nos interesara, *a seguirlo por televisión*, esta última, ya redimida de sus antiguos pecados, y frente a una palabra política ahora desprestigiada y desacreditada, no dejaría pasar la oportunidad de asumir el timón de mando de la relación. Con el tiempo, la televisión iría definiendo cada vez más los propios escenarios (y con ellos los géneros, los ritmos, los tiempos) en los que la política podía hacer oír su palabra, obligando a los políticos a iniciar una procesión –que duraría años– por los *sets* televisivos, a aprender a comer fideos con Tato, a contar chistes con Susana y a ir a la cama con Moria, a hablar con frases cortas y a entender el gesto ansioso con el que los operadores, detrás de las cámaras, les exigen que vayan redondeando.

Sobre llovido, mojado. Porque a la crisis militar venían a sumarse ya a esa altura de las cosas las graves dificultades que presentaba a la gestión de Alfonsín el frente representado por los problemas de la economía, que ya desde hacía un par de años habían llevado al presidente (se recuerda sin duda su famoso discurso, pronunciado también desde los balcones de la casa de gobierno, llamando a asumir los imperativos de una “economía de guerra”) a subordinar a las exigencias de los equilibrios macroeconómicos los objetivos políticos que en una etapa anterior había elegido priorizar. De manera que, igual que la crisis militar, también la crisis económica impondrá grandes restricciones a la autonomía y la ca-

pacidad de la política, y del discurso político, para fijar los ejes y los temas de los debates. Nuevamente en beneficio de los medios, desde luego (en contextos de crisis hiperinflacionaria juega en contra de los mecanismos de la representación política institucional, y a favor de la credibilidad de la televisión, la mucha mayor *velocidad* con la que esta última puede dar cuenta de las situaciones que angustian a los ciudadanos), pero además, en este caso, en beneficio de *otro actor que adquirirá una creciente y fundamental importancia desde los años finales de la gestión alfonsinista y durante toda la larga década siguiente: los técnicos de la economía*, voceros o no (aunque generalmente sí) de los organismos financieros internacionales, partes o no (aunque generalmente sí) del *showbusiness* televisivo. El discurso técnico-económico —que, por supuesto, no es ideológicamente neutro, sino que “presupone un mundo sin intereses diferenciados, sin conflictos valorativos” (Mocca, 2002: 266) y sin necesidad, por lo tanto, de administrar los disensos ni de construir consensos: sin necesidad, en fin, de *política*— asumirá, en efecto, desde fines de la década del ochenta y durante muchos años, una función *política* de primer orden: organizará los debates, impondrá sus temas y su jerga, forzará a los políticos a asumir sus problemas y sus prioridades. A mediados de los años 1980, en efecto, comienza en la Argentina lo que quizás correspondería llamar la *colonización* del discurso político por el económico, la colonización del discurso de los políticos por el discurso de los técnicos de la economía y de las finanzas (que se vuelven entonces poderosamente políticos). Doble colonización, entonces, de la palabra política (por el discurso mediático y por el discurso económico neoclásico), que fue también una subordinación a dos formas de “realismo”: el realismo de los “tiempos cortos” de los medios y el realismo del equilibrio fiscal y la lucha antiinflacionaria de la economía del ajuste estructural. Una hipótesis fuerte que queremos sostener aquí es que esa colonización no dejaría de producir efectos decisivos hasta por lo menos tres lustros más tarde.

3. NUESTROS AÑOS NOVENTA

A diferencia de su antecesor, Carlos Menem nunca sostuvo su fuerte predicamento sobre la ciudadanía que lo eligió presidente en 1989, y lo reeligió para el mismo cargo seis años después, sobre su capacidad para articular una *palabra* política capaz de ordenar el espacio de las discusiones y de los debates, sino, al contrario (en el contexto de *crisis* de esa palabra política a la que venimos de referirnos), sobre su capacidad para entablar un nuevo tipo de “pacto” con la ciudadanía, un pacto —como Landi mostró también en numerosas oportunidades— sostenido más sobre un sistema de guiños de complicidad y gestos que despertaban identificación y familiaridad que sobre la coherencia argumentativa de un discurso del que, a fuerza de engaños y de desengaños, los ciudadanos argentinos habíamos aprendido a desconfiar. Así, en medio de un clima de sospecha y desilusión generalizadas frente a las instituciones políticas representativas y al género del discurso político en el que de manera dominante venía siendo conjugada la política desde el inicio del ciclo de la transición, Menem construyó la legitimidad de su figura y de su liderazgo mostrando una gran capacidad para establecer un contacto directo con los ciudadanos, un tipo de vínculo que contrastaba con la distancia con la que se percibía a la mayor parte de lo que, como ya observamos, empezaba a llamarse la “clase política”. A eso se añadía que —como Landi se ocupaba a menudo de destacar⁹— Menem era un hombre de la noche, amigo de artistas y de deportistas famosos, objeto él mismo de frecuentes imitaciones humorísticas en la televisión y que aparecía en la pantalla de manera habitual, casi como uno de sus habitantes naturales, exhibiendo siempre, por cierto, un estilo de fuerte sintonía con varios de los géneros dominan-

⁹ Cf. en especial Landi, 1992.

tes en la televisión: el melodrama, el humor gestual, la parodia. Por otro lado —y esto parece fundamental para comprender la “versolimitud social” de la promesa de estabilidad y bienestar que Menem encarnaba—, el nuevo presidente dejó clara desde el comienzo (o casi) lo que podemos llamar su *opción por los poderosos*, su decisión (digamos, de nuevo: “realista”) de ponerse del lado de los que (según se ocupaban de subrayar, por otro lado, los siempre dispuestos economistas del *establishment*) daban a su programa de gobierno mayores chances de éxito. Así, en síntesis, triplemente avalado por su estilo canchero y espontáneo, por su dominio de los principales géneros de la cultura de masas y por su vociferada decisión de subirse al carro de los ganadores, Menem consiguió articular exitosamente una *nueva promesa* a la ciudadanía: la de un bienestar ligado al consumo. La garantía del cumplimiento de esa promesa —el sostenimiento de la estabilidad de la moneda— portaba también a su favor la condición de ser una receta dictada por expertos.

Pero entendámonos: no es que durante los años de lo que solemos llamar el *menemismo* el espectáculo televisivo y la economía hayan reemplazado a la política y la imagen haya desplazado a las palabras. Por el contrario, lo que los años menemistas nos enseñan, como Landi se ocupó de señalar en numerosas oportunidades, es que *no existe un único género* en el que la palabra política puede articularse, ni tampoco un único enunciador posible de esas palabras. Que las culturas políticas están compuestas por “paquetes de géneros” que pueden ser muy cambiantes y no tener necesariamente su centro en el discurso político clásico. La “cultura política menemista”, si se nos permite llamarla así, se organizó conforme una “división de funciones” alrededor de lo que Landi llamó, en su momento, un “juego de voces” que se organizaba en torno a tres vértices: por un lado, un presidente con buen contacto con la gente, que despertaba confianza (ya lo hemos dicho: encarnaba una cierta garantía de estabilidad) y resultaba cercano y creí-

ble; por otro lado, los técnicos del ajuste y de la reconversión económica, que construían —posiblemente más que el propio presidente— la agenda de temas del país; por último, ciertos periodistas y comunicadores que con gran eficacia jugaban el papel de “intelectuales orgánicos” de todo el esquema. De modo que no es que durante los años del menemismo no haya habido palabra política en la Argentina, sino que esa palabra política era articulada a través de un “juego de voces” múltiple y plural, por medio del cual el presidente *delegaba* en otros, *confiaba* a otros (especialmente, ya lo dijimos, a los economistas: el discurso económico asume una función *política* de primer orden en la Argentina de los 90) la legitimación discursiva de las transformaciones que propiciaba y que consumó.

Pero la cuestión del menemismo no es el tema de este trabajo y ni siquiera, en realidad, de esta sección. Por el contrario, lo que aquí querríamos destacar es la manera en que esa doble colonización del discurso político (por el discurso económico y por los imperativos técnicos de los *mass media*), en la medida en que, lejos de ser considerada críticamente, *fue naturalizada y aceptada sin mayor reflexión por la oposición política e intelectual al menemismo cuando éste empezaba a dar signos de agotamiento y a hacer previsible su inminente fin*, condicionó decisivamente las posibilidades de esa oposición política e intelectual de decir, e incluso de pensar, cualquier cosa más o menos diferente de lo que ese menemismo al que quería (y acaso sinceramente creía) oponerse había conseguido instalar como sentido común universal. Queremos decir: que no era posible pensar ninguna cosa más o menos diferente de ese sentido común edificado durante los años 1990 si se aceptaba como un imperativo inexcusable la obligación de no decir ni tres palabras sin intercalar una declaración de alarma por el aumento de las cifras del “riesgo país”, y que tampoco era posible pensar ninguna cosa original y renovadora si se partía de suponer que el único lugar desde el que se podía dirigir a la ciudadanía

una palabra diferente era la mesa del programa televisivo del profesor Grondona. Cuando un poco más arriba sugeríamos que la Argentina padecería durante muchos años la doble colonización de la palabra política por las exigencias de la economía y de los medios nos referíamos exactamente a esto: a la incapacidad de la oposición política e intelectual al menemismo (que había internalizado esos imperativos como datos duros de una realidad presuntamente inmodificable) de articular una *palabra política original y renovadora*, con ideas diferentes, con una retórica diferente y en escenarios diferentes a aquellos a los que la amplia hegemonía de los discursos televisivo y técnico-económico la habían condenado. Una palabra política que pudiera *poner otro sentido* en medio del clima general de resignación y de naturalización del fracaso y de la impotencia, una palabra política que pudiera conmovernos y entusiasrnos, o siquiera (si esto último sonara demasiado exigente) replantear una discusión sobre los horizontes de nuestra vida colectiva.

Esta incapacidad de las fuerzas de lo que en un sentido muy general podríamos designar como el “anti-menemismo” (devenido, luego de 1999, “pos-menemismo”) para articular una palabra política diferente, original y renovadora en la política argentina, para establecer con la ciudadanía otro tipo de “pacto” y para formular a esa misma ciudadanía otro tipo de “promesas”, expresa y también explica algunas otras incapacidades, no menos serias, de esas mismas fuerzas. En primer lugar, su cabal incapacidad para criticar (para pensar contra) el programa del gobierno de Menem. Las pocas críticas que las fuerzas de la oposición a ese gobierno fue capaz de elaborar se reducían al ámbito de la –digamos– “moral pública”, y se limitaban a un conjunto de condenas más o menos inocuas (que ni siquiera los sectores ideológicamente más cercanos al gobierno tenían inconvenientes en aceptar e incluso asumir como propias) a la “corrupción” y a la deshonestidad de este o aquel funcionario del Estado. Así, las fuerzas políticas que, sin haber

cuestionado nunca seriamente los programas de reformas estructurales y de estabilidad de la moneda desarrollados durante los gobiernos de Menem, tomaron su relevo en el último año de la década, no sólo no consiguieron formular a la ciudadanía argentina una promesa diferente a la que habían encarnado esos gobiernos, sino que fueron los encargados de insuflarle un último y morrocino aliento, antes de que todo se derrumbara (y por cierto que no sin convocar en su auxilio, para ello, al mismísimo padre del así llamado “modelo”), a la debilitada promesa menemista de “estabilidad” y “bienestar”.

En segundo lugar, estas fuerzas políticas, que en general nos habíamos acostumbrado a calificar como “progresistas” (ésa es, con toda probabilidad, su caracterización más precisa: son sin duda los supuestos de lo que cabría llamar una *cosmovisión progresista* los que limitaron las potencialidades no sólo políticas, sino, antes y sobre todo, conceptuales, de esas fuerzas¹⁰), coincidieron también con el menemismo al que tibiamente se opusieron primero, y menos tibiamente prolongaron después, en una segunda característica: su militante desprecio por –y desestímulo de– todas las formas de movilización de las organizaciones políticas y sociales, su ostensible –y declarada, por lo demás– desconfianza ante la participación popular, deliberativa y activa, en los asuntos de interés común, y su franco temor, generalmente no disimulado, frente a la propia *presencia* de los ciudadanos en el espacio público. Nada nuevo, desde ya: en la sección anterior habíamos recordado al ex presidente Alfonsín dispersando a docenas de miles de ciudadanos movilizados y activos y mandándolos al espacio privado de sus hogares a seguir por televisión, como miembros de la vasta y anónima platea que todos integramos desde entonces, los acontecimientos que los habían reunido. Vimos también cómo el disposi-

¹⁰ Ver sobre esto, en este mismo volumen, los trabajos de Alem y Corral.

tivo de enunciación menemista interpelaba allí, en sus casas, frente a las pantallas de sus televisores, a esos ciudadanos-espectadores que el ciclo de la “transición” había dejado como saldo, a los que les prometía, ahora, estabilidad monetaria y posibilidades de consumo. Lo que aquí estamos agregando es, simplemente, que ni la oposición al menemismo ni el gobierno posterior de la Alianza hicieron el menor esfuerzo por sacar de sus casas a esos ciudadanos-espectadores ni por prometerles nada diferente. Ni siquiera por llamarlos con un nombre diferente del que, desde fines de la década de los 80, venía sirviendo para designarlos de manera aséptica, a-política y neutral: “la gente”.

La gente. Es sugerente (y se ha escrito y dicho e ironizado mucho sobre esto) esta forma de designar, como a un gran colectivo estadístico, a los ciudadanos de un país. En efecto: la “gente”, en el modo en que esa expresión se usó abundantemente, y se usa todavía, en el lenguaje político argentino, define algo así como una versión transformada, reducida, pasteurizada y como oracular (producida por sujetos especialmente calificados para ello: los encuestadores y los periodistas) del viejo *demos*, como un sujeto evanescente, políticamente irrepresentable, o representable sólo como una unidad, sin clivajes ni divisiones internas. Como una especie de pueblo-uno, entonces, cosificado y homogeneizado gracias a las técnicas profesionales que se utilizan para escudriñarlo (cf. Vommaro, 2003). Suerte de tribunal anónimo, de platea anónima, de ciudadanía “light” que se expresa por medio de las encuestas de opinión, “la gente” se ha convertido en una de las grandes figuras de los lenguajes argentinos de los últimos lustros. Lo que abre la pregunta (teórica, metodológica, políticamente fundamental) acerca de la relación que es posible establecer entre esa “figura” y los hombres –como suele decirse– “de carne y hueso” a los que la misma aspira a designar. Pregunta a la que, desde ya, no debería responderse afirmando algo tan torpe como que esos hombres de carne y hueso son “verdaderos” mientras que esa figura de “la gente”

es “falsa”¹¹, porque ese modo de responder esa pregunta esquivaba en lugar de recoger la densidad de los conceptos que la misma involucra y las tensiones ineliminables que ellos contienen. Esquivaba en lugar de recoger –en otras palabras– el hecho de que esos “hombres de carne y hueso” *no dejan de expresarse –entre otras formas– a través de esas encuestas* que recogen sus opiniones y las interpretan como las opiniones de “la gente”, así como el hecho de que esa “gente” *no deja de existir –también– en el mundo exterior a esas encuestas.* En alguna de las muchas manifestaciones organizadas por la CTA durante los años 90, un cartel desplegado por el sindicato de trabajadores de prensa, UTPBA, rezaba (y el asunto está lleno de interés teórico para nosotros): “La gente existe”. Era casi un grito. Un grito que se negaba a admitir que “la gente” debiera ser pensada sólo como una categoría estadística del discurso experto, que ponía frente a “la gente” de los encuestadores a los

¹¹ Ni menos que menos –desde ya– que esta figura de la “gente” es irreal porque lo que “de verdad” existe no es lo que ella designa, sino más bien lo que solía designar la vieja y ahora menos utilizada categoría de “pueblo”. ¿Cómo si el concepto de “pueblo”, tal como nosotros solemos utilizarlo, no fuera, él también, un concepto perfectamente datado, un invento de la teoría –pero sobre todo de la política– moderna cuya historia, cuyos avatares y cuyos contratiempos podemos empeñarnos en estudiar y en comprender! (Excede los propósitos de este trabajo ingresar siquiera en esta cuestión enorme, pero no queremos dejar de mencionar –sobre todo por el modo en que articula esta cuestión de “la invención del pueblo” con uno de los problemas con los que venimos lidiando acá: el de la representación– el excelente trabajo de Morgan, 2006.) Nos meremos aquí en zona pantanosa, y corremos el riesgo de quedarnos a vivir. Permítasenos formular pues, antes de salir –y para salir rápido–, dos observaciones brevísimas. Una: que una cosa es aceptar –lo que es de toda sensatez– que los conceptos de “gente”, o de “pueblo” (o de “nación”, o de “mujer”, o de “Argentina”) son “inventos”, “creaciones” o *constructos* (cosa que son), y otra muy distinta, y completamente disparatada, pretender que porque lo son son “irreales”, aparentes, ilusorios, “meras invenciones”, y no merecen por lo tanto nuestra amable consideración. ¿Qué absurda idea es ésa según la cual algo que ha sido construido *no existe*, y no existe *precisamente porque ha sido construido*? A ver: los edificios, las bicicletas, las mesas, las mercancías, los fetiches, las identidades, las naciones y los pueblos *han sido construidos*, y es *precisamente por eso*, y gracias a eso, que existen. Existen: están en el mundo, y si nos interesa algo sobre el mundo debemos ocuparnos de ellos. Y la otra: que –por la misma razón– del hecho de aceptar algo tan obvio como que “el pueblo” y “la gente” son, ambos, *conceptos*, construcciones conceptuales, *no se deriva* que sea irrelevante (todo lo contrario: se deriva que es fundamental) estudiar cuánto y por qué uno de esos conceptos empezó a reemplazar al otro como forma dominante, en la política y en las ciencias sociales argentinas, toda vez que uno y otro concepto tienen, como es obvio, connotaciones, supuestos e implicancias muy diferentes.

hombres “de carne y hueso” que reclamaban en la calle (“¡qué también son gente, caramba!”), y que, al hacerlo, anunciaba una tensión que no haría sino agudizarse en los años siguientes.¹² Hasta estallar cuando el gobierno de la Alianza (el gobierno, como se decía, y como a él mismo le gustaba representarse, de *la gente*) debió enfrenar la protesta de los miles y miles de personas que salieron a la calle (fuera de sus canales habituales: la televisión y las encuestas de opinión) el 19 de diciembre de 2001. La mentada “crisis de representación”, que puede ser pensada, como dijimos, como el resultado del distanciamiento de “los representantes” respecto a los ciudadanos, puede ser pensada también (puesto que es otra expresión del mismo alejamiento) como el resultado de la agudización de la tensión entre *la gente* de las encuestas y los encuestadores y *la gente* movilizada en las calles y en las plazas.

¹² Esta tensión es lo que nos interesa y lo que estamos intentando explorar. Como síntoma de nuestra propia dificultad para procesarla, habrá advertido el lector que venimos utilizando la expresión “la gente” entre comillas. Pero la solución, ostensiblemente insuficiente, no nos satisface, y el propio lector habrá empezado por su parte a arrear sus cejas ante tan torpe recurso: ¿Qué? ¿Cada vez que escribamos “la gente” vamos a usar esas comillas, para que quede claro lo que, como ya hemos dicho, debería estar claro de sobra: que estamos ante un *constructo*, un invento, acaso incluso una ficción? ¿Pero acaso no estamos *siempre*, dijimos, ante *constructos*, invenciones, incluso quizás ficciones (*Fictio figura veritatis*, decían los juristas medievales: la ficción es una figura de la verdad, no su falsificación ni su remedo)? ¿Qué sustantivo de este texto, o de cualquier texto, se salvaría de las comillas si fuéramos a usarlas para indicar esa perogrullada? (Para una lindísima crítica de las comillas y de sus implicaciones epistemológicas y ontológicas, véase Catanzaro, 2004) ¿O estaremos acaso tramando usar esas comillas sólo *a veces*, cuando usemos la expresión “la gente” como categoría estadística, pero prescindir de ellas *otras* veces, cuando la usemos para designar a esos hombres “de carne y hueso”, como decíamos en el texto, que además de contestar encuestas viven y luchan y se expresan de otros modos? ¿Pero qué hacer en ese caso con el hecho de que esos hombres de carne y hueso, además de vivir y luchar y expresarse de otros modos, *también contestan encuestas*? Y al revés: ¿qué hacer con el hecho de que las opiniones de “la gente” que nos revelan las encuestas, además de ser un artificio estadístico, son el resultado de respuestas dadas por hombres de carne y hueso a las encuestas que les han sido realizadas? Está claro que la tensión entre lo que torpemente venimos llamando “la gente” y lo que no menos torpemente podríamos llamar la gente es una tensión mucho más difícil de pensar que esto, y para expresar lo más adecuadamente posible esta tensión vamos a abandonar en adelante las comillas y escribir siempre *la gente*, así, con letra bastardilla. La bastardilla es siempre una señal de énfasis, una advertencia de la crispación de un concepto, un aviso de densidad teórica y un pedido de atención especial. Cada vez que, en adelante, escribamos *la gente*, estamos tratando de subrayar esa ineliminable tensión que —esperamos haber mostrado— involucra *siempre* esa palabra.

Y lo uno y lo otro pueden ser pensados también (es lo que estábamos sugiriendo: volvamos entonces a nuestro argumento central) como expresiones de una crisis *de la palabra política*, de la credibilidad y la legitimidad de la palabra política. Habíamos visto el papel que tuvo la palabra política en la configuración misma del espacio público argentino en los años de la “transición”: los ochenta. Vimos después el modo en que esa palabra política se vio colonizada, por un lado, por la lógica de los *mass media*, y, por otro, por el lenguaje técnico de la economía, durante toda la década menemista: los noventa. Lo que ahora corresponde decir es que, puesto que ni antes ni después de su llegada al gobierno los dirigentes de la Alianza hicieron el menor intento por resolver el problema político fundamental de devolverle credibilidad a la palabra y abrir a través de ella debates, expectativas y promesas de futuro, la palabra política —como Oscar Landi, nuevamente, observaba con angustiada agudeza— prosiguió en la Argentina, durante los primeros meses del nuevo milenio, el camino de una degradación que parecía no tener fin, tristemente convertida (penoso cierre del ciclo que se había inaugurado, en jornadas de lucida oratoria cívica y grandes entusiasmos colectivos, en los ya remotos días de 1983) en una “señalética” dirigida a actores políticos, económicos y financieros externos. En octubre de ese mismo año 2000 en que Landi asentaba estos pareceres (cf. Landi, 2000), el periódico *Página/12* publicó una entrevista de Horacio Verbitsky a Guillermo O’Donnell, en la que este último aludía, con similar alarma, a riesgo de lo que llamaba una “muerte lenta” —una prolongada y agónica corrosión y degradación— de la democracia argentina. Este destino no era, según el autor de *El Estado Burocrático Autoritario*, inevitable, pero había algunos “síntomas preocupantes” de que las cosas iban en esa dirección. Entre ellos, O’Donnell destacaba algo que muchos otros analistas, en esos mismos días, señalaban también: la creciente distancia de los “representantes del pueblo” respecto a los ciudadanos. La “clase política”, escribía, “está cada

vez más ocupada de sí misma y no de las grandes cuestiones públicas”, y la ciudadanía, frente a eso, “responde con cinismo, alienación y enojo, porque siente que lo que pasa en la política nada tiene que ver con sus anhelos y sus pesares” (O’Donnell, 2000: 12). Expresado con estas u otras palabras, este tipo de diagnóstico (que con diversos matices y variaciones subrayaba la pérdida de “intensidad” de la ciudadanía, el deterioro de las identidades y el debilitamiento y corrupción de las instituciones representativas) estaba entonces ampliamente extendido.

Y por cierto que tuvo ocasión de verificarse en las elecciones legislativas de octubre de 2001, en las que, como es bien sabido, el gobierno aliancista sufrió, a sólo dos años de haber asumido, una derrota estrepitosa en manos de la oposición justicialista. Sin embargo, más relevante que destacar eso parece subrayar –como lo hace Isidoro Cheresky en un libro dedicado a contraponer la mó-dica “ilusión reformista” expresada en las elecciones presidenciales de 1999 con el estridente “descontento ciudadano” manifestado en estos otros comicios– lo que sin duda constituye el gran dato de esas elecciones: la llamativa “extensión del rechazo a las alternativas políticas existentes: uno de cada cuatro ciudadanos se abstuvo de votar y, entre quienes lo hicieron, una proporción similar lo hizo con un sufragio anulado o en blanco” (Cheresky, 2003: 23). Como observa Cheresky, la frustración colectiva frente a la performance del gobierno de la Alianza apuntaba, por encima de los responsables directos de la misma, al conjunto de la dirigencia política nacional, objeto de una descalificación maciza y generalizada. Fue en ese contexto, después de las elecciones, cuando al vertiginoso deterioro de su ya menguada credibilidad se le sumaba una creciente pérdida de control sobre las variables de la economía, que el gobierno De la Rúa, a instancias del ministro Cavallo, ensayó un desesperado conjunto de medidas de emergencia, que incluyeron, en diciembre, el famoso y unánimemente repudiado “corralito” sobre los depósitos bancarios. A las protestas sociales

que ya se habían generalizado en todo el país vinieron a sumarse entonces las de los trabajadores, jubilados y ahorristas que habían visto retenidos sus salarios, jubilaciones y peculios, así como las del resto de los damnificados por las últimas disposiciones económicas del gobierno. El 19 de diciembre, el país estalló.

4. LA POLÍTICA EN DISCUSIÓN

Poco después del “estallido” de diciembre y de los más o menos grotescos pasos de comedia que siguieron al mismo en la cima de los poderes del Estado hasta que la Asamblea Legislativa designó como presidente provisional al ex candidato presidencial (derrotado por el aspirante aliancista en 1999) y entonces senador nacional Eduardo Duhalde, apareció en Buenos Aires muy sugerente libro colectivo compilado por Horacio Fazio. En su tapa, el título –*La política en discusión*– aparece verosímilmente enmarcado por la fotografía de una vieja cacerola, que simboliza a las que, en las ruidosas jornadas de diciembre del año anterior, habían constituido el improvisado instrumental casero con el que los ciudadanos de la capital se habían lanzado a las calles tras el anuncio del estado de sitio por parte del declinante Fernando de la Rúa. Hay en ello, sin embargo, una pequeña astucia editorial, toda vez que el contenido del libro transcribe una serie de debates político-académicos producidos en Buenos Aires, por iniciativa (y en la sede) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en los meses *anteriores* al aquelarre decembrino. De hecho, el propósito de esos debates y del libro que los recoge era realizar una evaluación colectiva de la gestión de la Alianza y de la situación política del país tras la renuncia a la vicepresidencia de la República de “Chacho” Álvarez, quien había abierto los debates con dos exposiciones más o menos autocríticas, comentadas después por el

nutrido grupo de invitados que había participado en ellos. Leer esas opiniones de Álvarez y de sus comentaristas *después* de los acontecimientos de diciembre resulta entonces muy revelador, porque nos permite echar luz sobre algunas de las causas de esos acontecimientos con la ayuda de un puñado de diagnósticos sobre los déficits de la gestión aliancista realizados algunos meses *antes* de que esos acontecimientos se desencadenaran.

Pero no sólo eso: la lista de participantes en ese seminario que se había propuesto discutir con y a “Chacho” Álvarez nos permite ver, además, *quiénes eran las personas “autorizadas”* a hacer una cosa semejante, quiénes eran las personas autorizadas a discutir la política para el imaginario académico “progresista” argentino de esas postrimerías de los años 1990: una representación bastante exhaustiva de intelectuales progresistas y de izquierda (por orden de aparición en el libro y en el seminario: Carlos Strasser, Isidoro Cheresky, Juan Carlos Portantiero, Marcelo Escolar, Alcira Argumedo, Torcuato Di Tella, Atilio Borón, José Pablo Feinmann), economistas ortodoxos (Federico Stuzenegger, entonces secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, y Abel Viglione, economista *senior* de Fiel, consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y director de empresas calificadoras de riesgo, tal como es presentado en el libro) y heterodoxos (Mario Damill, Rubén Lo Vuolo), dirigentes partidarios de segundo rango del peronismo (Juan Carlos Del Bello), del Frepaso (Pedro Del Piero) y del radicalismo (Jesús Rodríguez), encuestadores e intelectuales encargados de hablar de *la gente* (Gerardo Adrogué, Rosendo Fraga, Luis Alberto Quevedo y Enrique Zuleta Puceiro) y el fuertemente massmediático ex fiscal Luis Moreno Ocampo, quien había insistido, todo a lo largo de los años noventa, en hacer de la crítica de la corrupción el eje de la crítica de la política. Entonces: intelectuales de diversas corrientes, encuestadores, economistas, especialistas en corrupción, dirigentes de los principales partidos. *Ni sindicalistas* (ni siquiera de la CTA,

central cercana, en sus inicios, al Frepaso), *ni dirigentes de los principales grupos piqueteros* —que ya entonces contaban con cierta importancia política tras los cortes de La Matanza de 2000 y de 2001—, *ni dirigentes sociales de otras organizaciones* (de defensa de los derechos humanos, contra la impunidad, etc.), ni empresarios de las principales cámaras. Es decir que los miembros y representantes de “las corporaciones” y los movimientos sociales no formaban parte de los invitados a discutir política. O no tenían, ellos mismos, interés en participar de una actividad de esta naturaleza: no sabemos. Pero, como quiera que sea, su ausencia expresa cabalmente lo que llamamos recién el “imaginario” de los 90.

Del conjunto de opiniones que recoge el libro (entre las que cabe destacar las de Juan Carlos Portantiero por su capacidad anticipatoria y las de Isidoro Cheresky y Alcira Argumedo —muy distintas entre sí, por lo demás— por sus útiles observaciones críticas sobre lo que cabría llamar los *vicios constitutivos* del modo de plantearse las cosas de la Alianza), nos gustaría llamar la atención aquí sobre dos de las que propone la contribución de Carlos Strasser. La primera, de nivel más general, se refiere a la naturaleza misma del régimen político argentino consolidado durante los años de la “transición”. Hemos dicho ya que ese régimen, al que a veces, por comodidad o rapidez, calificamos como “democrático”, es en realidad un *mix* entre instituciones, tradiciones y prácticas democráticas y liberales, participativas y representativas, y un *mix* que, por cierto, tiene bastante más de estas últimas que de las primeras. Strasser está de acuerdo con esto, señalando —con una terminología que es apenas diferente— que la democracia argentina es mucho más *liberal* que *popular*. Pero Strasser va todavía más allá, indicando que esa democracia liberal (a la que nombra, siguiendo una larga tradición politológica, como *poliarquía*) no agota las características —mucho más complejas, mucho más “mezcladas”— del régimen político *realmente existente* en la Argentina. Que no sólo articula (bajo la forma de la *poliarquía*) princi-

prios democráticos y principios liberales, sino que puede caracterizarse como una suerte de régimen híbrido que integra elementos, tradiciones y criterios de legitimidad poliárquicos, oligárquicos, burocráticos, tecnocráticos y corporativos *que no resulta posible plantearse gobernar eficazmente –como pretendió hacerlo la Alianza– bajo el exclusivo amparo de una legitimidad de tipo electoral* (Strasser, 2002: 54s).

La segunda, de nivel más específico, se refiere a la falta de comprensión, por parte de los miembros del gobierno de la Alianza, de las exigencias de lo que Strasser llama la lucha cultural, o hegemónica (“en el sentido de Gramsci”, dice Strasser), por la transformación de las instituciones y de las prácticas políticas. Una lucha que requiere “una fuerza, una voluntad, una unidad, una coherencia”, un conjunto de ideas “técnicas, científicas, doctrinarias, ideológicas” (*ibid.*: 51) que ciertamente no parece haber sido el fuerte de la gestión aliancista. Ideas. De nuevo: *palabras*. De ellas está hecha la lucha cultural que Strasser lamenta que la dirigencia de la Alianza no haya estado a la altura de emprender. De palabras. Palabras-faro, palabras-guía, como reclamaba Landi en sus artículos de esos años, cuando escribía, por ejemplo: “Que la política suelte alguna frase que me vuelva a atravesar”. *¡Palabras, palabras, palabras!*: el angustiado reclamo que expresaban los artículos de Landi, el reproche –bastante semejante– que se deja leer en el de Strasser que aquí estamos comentando, la alarma que –también en la misma dirección– acompaña el diagnóstico de O’Donnell sobre la degradación y “muerte lenta” de una democracia sin ideas y sin proyectos, de una democracia cuyo problema, digámoslo una vez más, *no era el exceso sino la falta de palabras*, constituyen otras tantas versiones de una preocupación que hoy, retrospectivamente, resulta ampliamente justificada, y que de una manera contundente se expresó en las calles argentinas en las jornadas de diciembre de 2001.

5. DE CORRALITOS Y REVOLUCIONES

“El único estado que ninguna sociedad puede soportar es la anarquía”. Eduardo Duhalde se cansó de repetir esta frase, ciertamente no exenta de sabiduría –y que, apenas hay que decirlo, *no dejaba de expresar también una demanda social ampliamente extendida después de los acontecimientos de diciembre–*, en defensa de la faena de, digamos así, “reconstrucción” institucional, política y social que llevó adelante durante los meses que duró su gestión “normalizadora”, a la que, como escribió Edgardo Mocca, “ayudado en partes más o menos iguales por su natural espíritu componedor, el buen sentido de la mayor parte de la dirigencia política y la fortuna”, logró dar “la impronta de la pacificación, el restablecimiento del orden y la detención de la brutal caída económica” del país (Mocca, 2004: 84). Es cierto que todo esto lo hizo el gobierno provisional en los términos más inmediata y previsiblemente asistencialistas y lenitivos, y no abriendo especialmente el juego a la participación democrática de la población a la que dirigía sus perentorios socorros y favores, pero ¿era posible pedirle seriamente otra cosa? No: quizás no era posible. *Pero eso no volvía a la situación menos preocupante*, como con enorme lucidez advertía, una vez más, Oscar Landi. En efecto, en un breve y notable artículo publicado en el diario *Clarín* en una fecha tan temprana como el 6 de enero de 2002, Landi llamaba la atención sobre el riesgo de que “las urgencias de la crisis y la necesidad de apagar el incendio” que recorría el tejido social argentino dejaran en la sombra “ciertos fundamentos básicos de la democracia”. Landi subrayaba el fuerte potencial democrático que habían tenido las distintas formas de expresión del descontento popular durante los últimos meses: en octubre, el masivo “voto bronca” al que ya nos hemos referido; en diciembre, las más ruidosas manifestaciones callejeras que habían forzado la renuncia del presidente De la Rúa. Pero advertía también sobre el hecho de que los propios dispositivos previs-

tos por la Constitución para superar la emergencia institucional abierta por esta renuncia *no habían hecho más que consumir, bien vistas las cosas, una extrema delegación del poder de los ciudadanos en sus representantes*. Al fin y al cabo, ¿no habían sido éstos, los repudiados representantes del pueblo, quienes, reunidos en la Asamblea legislativa, habían elegido *por vía indirecta* (no privándose incluso de proclamar en numerosas oportunidades, durante las dramáticas sesiones de esos días, que debían, ellos, “interpretar” los “mensajes” de *la gente*) al nuevo presidente de la nación?

De manera que, observaba Landi, la sociedad civil, después de las fuertes jornadas de protesta que todos habíamos vivido, había quedado encerrada, mucho más (y mucho más seriamente) que en el famoso corralito financiero, “en otro *corralito*: el de la representación política previamente establecida”, el de la *separación* entre representantes y representados. El hiato entre la esfera de “la heterogénea turbulencia social” y la de “los gobernantes” no parecía haberse reducido, a pesar de todo, respecto al que las separaba antes del 19 de diciembre, y en ese contexto —escribía Landi en este gran alegato democrático que acá estamos tratando de recuperar del vértigo periodístico de esos días de ansiedades y de preocupación—, y aun aceptando la situación de urgencia social que vivía el país, era necesario que la necesidad de medidas de emergencia no opacara “el fundamento máximo de la legitimidad de cualquier democracia moderna: el apoyo y la participación ciudadana”. Ese fundamento (que la energía de las jornadas decembrinas había vuelto a rescatar de la desconsideración a la que venía siendo sometido, pero al que las preocupaciones posteriores podían volver a sepultar bajo el apremio de las angustias cotidianas) debían darnos las grandes líneas del “plan maestro” a seguir ante la crisis. La mayor urgencia de la hora —insistía Landi— no era salir del corralito bancario que nos expropiaba de nuestros sueldos, ahorros y jubilaciones, sino salir del *corralito político* que nos expropiaba de nuestra “capacidad de decisión política directa” (Landi, 2002). En

la medida en que no fuera ésa la dirección que asumiera la política de los *representantes del pueblo* que estaban en el timón de mando de la crisis, no parecía fácil conjeturar que la misma fuera a arrojar finalmente, para la vida política argentina, el saldo de una democratización significativa.

En el mismo sentido, no deja de resultar igualmente significativo que Guillermo O’Donnell, a quien mencionamos un poco más arriba a propósito de un reportaje sobre “la muerte lenta de la democracia” concedido a fines de 2000, diera un año y medio más tarde *otra* entrevista (esta vez a Vicente Muleiro, de *Clarín*) insistiendo, casi en los mismos términos del anterior (casi “como si nada hubiera sucedido”, casi como si diciembre de 2001 se hubiera convertido en un episodio, excepcional, sin duda, pero pasajero, sepultado por la eficacia de los mecanismos anti-democráticos del sistema), sobre los riesgos de una degradación progresiva de la calidad de nuestra democracia.¹³ En síntesis: que si era indudable que la sociedad argentina (que parte, al menos, de la sociedad argentina) estaba movilizadada y había aprendido algunas nuevas formas de intervención en el espacio público, no lo era menos que esa ciudadanía seguía enfrentando un poderosos dispositivo de neutralización de sus demandas y de expropiación de su soberanía y de su capacidad de decisión. Hacia mediados de 2002, era sin duda posible afirmar que el “sistema”, si quisiéramos decirlo así, había logrado “hacerse cargo” de la situación generada en diciembre del año anterior. Que la palabra, “tomada” en diciembre, había sido plenamente “retomada” poco tiempo más tarde. Para la época en la que el gobierno de Duhalde realizó la convocatoria a las elecciones presidenciales de 2003, era fácil tener la impresión de que podía decirse sobre las circunstancias argentinas lo mismo que el viejo Hobbes había dicho, en su maduro *Behemoth*, sobre el ciclo

¹³ Cf. O’Donnell, 2001.

político inglés del siglo XVII: que todo aquello no había sido más que “una gran revolución”. Una frase muy interesante, ésa de Hobbes, si se tiene en cuenta que en ella la palabra “revolución” no está usada en el sentido moderno que sólo iría a adquirir en las luchas políticas europeas del siglo siguiente al suyo, sino en el sentido pre-moderno, astrológico, de la vuelta en círculo que dan los planetas hasta alcanzar el mismo punto del que habían partido.

Y sin embargo...

6. PAZ, ADMINISTRACIÓN... Y CACEROLAS

Sin embargo, por varias razones parece posible y necesario revisar hoy ese diagnóstico tan sombrío. Es rigurosamente cierto que, tras el desbarajuste de 2001, el gobierno restaurador de Duhalde obtuvo un importante éxito en su faena normalizadora y que tras la misma el *orden* político volvió a reinar (de la mano, como Landi y O'Donnell advertían con toda razón, de muchas de las mismas instituciones, relaciones y rutinas que habían sido cuestionadas por medio de la intensa movilización popular inmediatamente precedente) en la Argentina. Es igualmente cierto que, como observa Edgardo Mocca, vista en una perspectiva de mediano plazo “la herencia de la movilización ciudadana de fines de 2001 y principios de 2002 no fue una refundación raigal, un nuevo punto cero de la política argentina, sino la insinuación de un curso reformista en el contexto de una plena continuidad institucional” (Mocca, 2004: 100). Aunque sin duda un poco exagerado, es también cierto que, como escribe Inés Pousadela, “al fin de cuentas *no se fue casi nadie*” (Pousadela: 132). Pero no es menos cierto que algunos (y algunos que no carecen de importancia) *sí se fueron*, que “la insinuación de un curso reformista en el contexto de una plena continuidad institucional” *no es poca cosa*, que después de diciembre de 2001 mu-

chos de los temas que entonces se ventilaron han ingresado definitivamente a la agenda política nacional y no pueden ser desconsiderados por ningún gobierno que aspire a representar los sentimientos mayoritarios de la ciudadanía, y sobre todo que el aprendizaje democrático realizado por esa ciudadanía *y por sus gobernantes* durante esos meses de tan intensa actividad y movilización *no tiene marcha atrás y configura una garantía democrática fundamental hacia el futuro*. Quizás nadie lo expresó tan bien como el mismísimo Duhalde cuando dijo –sacando de los acontecimientos de los que aquí hemos venido hablando una penetrante conclusión que, como ha dicho Mario Wainfeld, lo revela al mismo tiempo como un pensador político sagaz y como un estilista menor– que “con la gente no se jode”. *Con la gente no se jode. Que la gente y sus gobernantes* lo hayan aprendido para siempre constituye sin duda un saldo importantísimo, decisivo, de los hechos de 2001 y 2002, y una razón fortísima para asegurar que el orden reconquistado en 2002 es cualitativamente diferente del que la movilización popular había conmovido y derribado el año anterior.

De hecho, una de las expresiones más ostensibles de esa diferencia fundamental radica en algo que ya habíamos anunciado y que durante estos meses de los que ahora hablamos se expresó con particular fuerza: a lo largo de los mismos, pero también después, hasta hoy mismo, *la gente*, a la que durante todos los 90 habíamos visto siempre “representada” por muestras estadísticas “interpretadas” por expertos, *salió a la calle*. Reveló que, *más allá* de esos artificios –y como protestaba aquel cartel de la UTPBA que comentábamos más arriba–, *existía*. Se emancipó, al menos parcialmente, de esas otras voces que hablaban en su nombre, y logró construir una vasta y heterogénea serie de espacios de movilización, de expresión y de participación en los que se reveló la disposición de los más diferentes actores sociales y políticos –desde los círculos de militancia “autonomista” más doctrinarios hasta cantidades de grupos de “vecinos hartos de la clase política”– a tomar los asuntos públicos

en sus manos.¹⁴ Y esto constituye un cambio decisivo *más allá* de la suerte que corrieron las distintas asambleas barriales, foros y asociaciones creadas al calor de los acontecimientos de diciembre de 2001 y de los meses que siguieron. En efecto, quizás una de las novedades fundamentales de esos meses argentinos –y uno de sus efectos más perdurables, cuyas consecuencias llegan hasta hoy– haya sido la reconquista de la centralidad de la idea y de la práctica de la manifestación, la movilización, la toma de la calle como expresión de demandas y como demostración de fuerzas. De fuerzas de lo más diversas, desde ya. Que incluyen a los grupos sindicales que reclaman por mejores salarios o condiciones de trabajo, a los grupos piqueteros que institucionalizaron el corte de calles y de rutas como elemento decisivo de su “repertorio” de acciones de protesta (Merklen, 2005), a los vecinos que acompañan el pedido de “mano dura” que encabeza Juan Carlos Blumberg (Annunziata y otros, 2006) y a los asambleístas de Gualeguaychú. Para todos estos actores tan diversos, que portan y expresan demandas tan distintas, y en ocasiones antitéticas, la gran lección de los acontecimientos de 2001 y 2002 parece ser –como ha afirmado, nuevamente, Mario Wainfeld¹⁵– que, sea lo que sea lo que se necesite o se reclame o se exija, si se lo hace en la calle se tienen más posibilidades de conseguirlo. Que, en otras palabras, no importa qué se busque, para conseguirlo es necesaria la movilización.

Así, es posible afirmar que, de una manera sin duda silvestre, rústica, poco elaborada y nada institucionalizada, pero al mismo tiempo, y acaso por lo mismo, muy potente, lo que más arriba llamamos el componente *democrático* del “*mix* liberal-democrático” en el que consiste el sistema político instalado entre nosotros

desde los años de la “transición” ha vuelto –como a los codazos: a fuerza de gritos y de cacerolas– a ocupar su sitio frente a –y en diálogo con– la otra pata de ese mismo sistema: su pata “representativa” y “liberal”, y que ello ha ocurrido por el mismo movimiento por el que *la gente* de los sondeos de opinión ha empezado a compartir su sitio con *la gente* (que es la misma) que se moviliza en las calles, las plazas y las rutas *y también (porque también es la misma) con la que decide apostar fuerte en el juego político-institucional en general, y en el juego electoral en particular*. En ese sentido, parecen particularmente desafortunados los análisis que buscan “explicar” los relativamente altos índices de presentismo y de voto “positivo” que caracterizaron a las elecciones presidenciales de 2003 como el resultado de quién sabe qué “retroceso” en la conciencia política –cuando no de algún tipo de más o menos culpable “cooptación”– de los ciudadanos que en octubre de 2001 habían elegido la vía de la abstención, el voto en blanco o la impugnación del voto, que dos meses más tarde habían expresado su furia saliendo a las calles y a las plazas, y que sólo un año y medio después de todo eso habían preferido optar, en una abrumadora mayoría, por alguno de los candidatos que se habían presentado a la competencia electoral. ¿Por qué no suponer, mucho más razonablemente, que esos ciudadanos se decidieron a elegir como presidente a uno de los candidatos que se presentaban a la competencia electoral con la misma actitud conciente, crítica y responsable, con la misma sabiduría con la que habían actuado –en cada caso escogiendo un camino diferente en el rico y plural *menú de alternativas* que se abre siempre frente a los sujetos de la vida política– en octubre y luego en diciembre de 2001? ¿Por qué deberíamos lamentar que la recomposición del campo político operada después de los acontecimientos de diciembre de 2001 se haya realizado de tal modo que dos años después los ciudadanos no se vieran ya impulsados a sentirse y a manifestarse “fuera”, sino “dentro”, de los mecanismos institucionales de la vida política liberal-democrática?

¹⁴ Cf. al respecto los trabajos de Maristella Svampa; por ejemplo, Svampa, 2003.

¹⁵ En el curso de su muy instructiva intervención en una mesa redonda en la que también participó uno de nosotros: “¿Qué es la nueva política?”, en la Universidad Nacional de Rosario, el 18 de mayo de 2006.

7. PALABRAS MALDITAS

Son conocidos los resultados de esas elecciones de 2003, sobre los que es inútil extendernos acá: tras la renuncia de Menem a presentarse a una segunda vuelta en la que todas las encuestas le auguraban una segura y cómoda derrota, Néstor Kirchner se convirtió, con menos de la cuarta parte de los votos emitidos y “siendo portador más de un voto rechazo que de una promesa avalada” (Cheresky, 2004: 36), en el nuevo presidente de los argentinos. Las circunstancias no eran sin duda ideales para edificar, sobre esas bases tan precarias, un liderazgo macizo y consistente, pero al mismo tiempo nunca antes había parecido más urgente y necesaria esa tarea: la tarea de levantar (necesariamente *después* de las elecciones) los pilares de una nueva legitimidad, de una nueva *credibilidad* del lazo de *representación* que, con todas las precariedades del caso, había conseguido empezar a restituirse a través de esas elecciones tan ostensiblemente “fuera de lo común” (*id.*). Y Kirchner se reveló, posiblemente más allá de todos los pronósticos, especialmente capaz de llevar adelante tal tarea. Lo hizo (y lo hizo con éxito: diversos indicadores, entre ellos los resultados de las elecciones legislativas de 2005, revelan que el presidente ha obtenido un fuerte apoyo de la ciudadanía a su persona y a su gobierno) recogiendo *simultáneamente* –y nos parece que es posible postular que aquí radica buena parte de su habilidad– *tanto* “los motivos predominantes en las grandes movilizaciones populares” (Mocca, 2004: 99) de fines de 2001 *cuanto* la “demanda de orden” que avaló y sustentó el accionar pacificador-restaurador de su antecesor inmediato en la presidencia. En efecto: es posible afirmar que Kirchner es *al mismo tiempo* un hijo del 2001 y un hijo del 2002, un heredero del reclamo decembrino de renovación de las cosas y un legatario de la exigencia de *paz y administración* que ese mismo reclamo despertó al poco tiempo en una ciudadanía que no tenía ninguna intención de prolongar indefinidamente el estado de conmoción que

ella misma había generado. Y por cierto que no deja de estar presente en el estilo de Kirchner la comprensión del cambio de los modos de aparición de *la gente* que trajo diciembre de 2001, que se expresa en su especial atención a los reclamos organizados, en su intento de evitar la confrontación directa con los planteos de Blumberg, en su decisión de no reprimir la movilización de los asambleístas de Gualeguaychú, en su actitud negociadora con algunas corrientes del movimiento piquetero *y en su propia –y no poco frecuente– apelación a la movilización de ciudadanos, grupos y organizaciones* a favor de tal o cual causa o en apoyo más general a su gobierno, como la que organizó, en un formato típicamente peronista, en el masivo acto del 25 de mayo de 2006.

Nos parece que está llena de interés político *y teórico* esta vocación y esta capacidad evidenciada por el presidente Kirchner para recuperar *juntas* dos demandas tan antitéticas como la demanda de democracia de 2001 y la demanda de gobernabilidad de 2002. Una vocación y una capacidad que si por un lado nos permitirían afirmar que el estilo político del actual presidente está mucho más cerca del viejo “arte de la conducción” peroniano (una difícil “geometría de las pasiones” sostenida sobre la rara maestría de saber fungir *al mismo tiempo* de incendiario y de bombero) que lo que lo estaba y lo está el talante (más clásicamente conservador-popular) del ex gobernador, ex senador y ex presidente Duhalde, por otro lado justifica la centralidad que alrededor de la pregunta por las características del “estilo K” ha adquirido de un tiempo a esta parte la discusión teórica sobre el populismo. Porque (y para recuperar acá *sólo una* de las muchas dimensiones que tiene esta importante discusión) el populismo presenta, en efecto, la rara condición de ser, *simultáneamente*, dos cosas. Por un lado, el credo teórico-político de un sujeto colectivo, el “pueblo”, que se define de modo conflictivo, antagónico, por referencia y por *oposición* a otro: a un enemigo –el anti-pueblo, la oligarquía, los vendepatrias, los cipayos, los gorilas– al que no se deja de señalar (como suele hacerlo Kirchner: de hecho, es posible decir –y se le ha dicho,

y se le ha dicho a menudo como una crítica— que Kirchner reintroduce un lenguaje belicoso, agresivo, poco contemporizador y poco “pluralista” en el discurso político argentino) con mucha fuerza. Por otro lado, un pensamiento que, bajo esa misma categoría de “pueblo”, puede ser y a menudo es, también, acusado de disimular o invisibilizar divisiones o conflictos que otro tipo de pensamiento pondría en cambio en primer lugar, prefiriendo una mirada más “organicista”, ordenadora y calma sobre la naturaleza del cuerpo social. El populismo, en efecto, contiene en su seno esta doble dimensión: es conflicto y orden, señalamiento de un límite, de una frontera, y vocación hegemónica “más acá” de esa frontera. Peronista más clásico y también más habilidoso que lo que podríamos haber estado invitados a creer cuando su rostro y su nombre apenas empezaban a aparecer con fuerza en las primeras líneas de la política nacional, Kirchner se mueve en esa tensión como pez en el agua.

Hemos introducido entonces, con toda intención, dos palabras “malditas”, dos palabras que, en general, suelen utilizarse de manera despreciativa y condenatoria, del lenguaje político y teórico-político argentino actual. Una es la palabra *populismo*, que es una vieja presencia en los debates teórico-políticos argentinos y latinoamericanos, pero que en los últimos años ha reaparecido en ellos portando una nueva serie de desafíos y posibilidades, y generando un productivo conjunto de debates teóricos. Brevemente: si tradicionalmente la palabra “populismo” servía para designar una forma más o menos “patológica” de la vida política de los pueblos, y si algunas otras posiciones —como por ejemplo la que ha sostenido en algunos trabajos recientes Carlos María Vilas— insisten en reclamar para esa categoría la capacidad para designar cierto específico conjunto de fenómenos políticos que, no “patológicos” ni “inde-seables”, se caracterizarían sí por una específica cantidad de rasgos particulares, un tercer tipo de aproximaciones (como la que, precisamente en polémica con Vilas, ha desarrollado últimamente Gerardo Aboy Carlés) tiende a ver en el populismo una forma política

mucho menos circunscrita.¹⁶ En efecto, el populismo —asegura Aboy Carlés— “es una forma de gestión de la tensión constitutiva de toda identidad política” (Aboy Carlés, 2006: 5), lo que acerca su mirada sobre el asunto a la que ha defendido recientemente Ernesto Laclau, en línea con algunas muy viejas preocupaciones suyas, en su sonoro e influyente *La razón populista*. La tesis central de ese libro, si se nos permitiera resumirla muy toscamente, es que el populismo, lejos de poder ser pensado como una forma patológica, desviada o “mala” de la política, dice en realidad la verdad última de la política. Que *no hay política sin populismo*, y que el sueño de las posiciones “transparentistas” que condenan las opacidades e impurezas propias del populismo no es en realidad la eliminación del populismo, sino la eliminación *de la política misma*. La identificación de política y populismo, la pretensión de que, para usar palabras de Laclau, “el populismo es la vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica de lo político como tal” (Laclau: 91), tiene como primer y evidente interés, frente a la condena del populismo como una desviación o una anomalía, el ponernos ante la necesidad de construir una teoría menos ingenua sobre la política.¹⁷ Esta teoría menos ingenua es —estamos sugiriendo— la que nos permitiría pensar mejor la política argentina en los “años de Kirchner”.

¹⁶ Consúltense sobre esto Vilas, 2004, y Aboy Carlés, 2005.

¹⁷ Surge sin embargo, de inmediato, una pregunta. Si la política y el populismo fueran, simplemente, *lo mismo*, ¿para qué nos serviría conservar la propia *palabra*, la propia *categoría* de “populismo”? ¿Qué especificidad reservamos, al perseverar en el uso de esa categoría, al fenómeno que la misma designaría? ¿O habría quizás que aceptar, pero de algún modo “matizada”, la provocación de Laclau, y decir que *en cierto sentido* toda política es populista, o que el populismo *dice la verdad última*, digamos así, de toda política, pero que, *en otro sentido* —o en otro plano de análisis— seguiría siendo posible y necesario hablar de regímenes, sistemas y formas de organización de la vida política “populistas” y de otros “no populistas”? Y si esta última fuera a ser nuestra conclusión, ¿dónde deberíamos situar, después de haber aceptado que toda forma de la política es populista “en cierto sentido” (i.e.: “en sentido amplio”), la especificidad de estas formas políticas populistas “en cierto otro sentido” (i.e.: “en sentido estricto”? ¿En el modo específico que tiene cada forma política particular de procesar la tensión entre la parte y el todo que —como observa Laclau— es constitutiva de todo orden político? ¿En el “significante” específico (que a veces es el significante “pueblo” y *otras veces no*) alrededor del cual se aspira a construir una identidad colectiva que, siendo necesariamente *una parte* del cuerpo social, aspire sin embargo, como indica Laclau, a representar *el todo*? Acá sólo podemos dejar planteado, de modo sumamente general, este interesantísimo problema.

La otra palabra que hemos introducido, *complementaria* a esta que acabamos de considerar, “populismo”, es la palabra “hegemonía”. El populismo –dijimos, en efecto– supone, por un lado, la definición de un *límite*, de una *frontera* (y la designación de un enemigo “más allá” de esa frontera), y, por el otro lado, una vocación *hegemónica* “más acá” de esa frontera. Ahora: con esta palabra, “hegemonía”, ha pasado últimamente en el lenguaje político argentino algo diferente de –en cierto sentido, exactamente contrario a– lo que ha ocurrido con la palabra “populismo”. Si esta última, en efecto, portaba tradicionalmente el estigma de designar un fenómeno, como decíamos, patológico, “anormal” y desviado, o cuanto menos muy localizado y específico, y sólo en el último tiempo empezamos a recuperarla con una capacidad descriptiva más general, la palabra “hegemonía”, que proviene de la vieja tradición gramsciana y supone una refinada reflexión sobre la naturaleza de la actividad política (una de las más exigentes teorizaciones sobre esa cuestión, de hecho, dentro de la gran tradición del marxismo occidental) ha sufrido en los últimos años una especie de degradación inopinada y absurda, y se ha vuelto, en el lenguaje periodístico, político e incluso politicológico, un insulto. “Vocación hegemónica” (o, con una modulación un tanto más pecaminizante: “pulsión hegemónica”, “tentación hegemónica”), “hegemonismo” y otras expresiones similares aparecen en efecto, últimamente, utilizadas para designar modalidades de conducción política poco amigas de la diferencia, más o menos inconfesables ambiciones personales de los políticos que las capitanean, perversiones de una política que, según parece sugerirse, debería, en principio, tener otras modalidades más virtuosas. Ahora bien: la idea de hegemonía, en realidad, no tiene nada que ver con ninguno de estos usos tan pobres, tan degradados, que suele hacerse con frecuencia de esta palabra. La palabra “hegemonía”, por el contrario, designa la forma misma de la lucha política por la construcción de un sujeto universal (verbigracia, el *pueblo*) en una sociedad hecha de dife-

rencias y particularidades.¹⁸ En este sentido, no sólo “populismo” y “hegemonía” *no son* “malas palabras” del lenguaje teórico-político, sino que además *van necesaria y rigurosamente de la mano*, en la medida en que constituyen dos dimensiones fundamentales de cualquier construcción política que merezca ese nombre.

Y que necesariamente deberá articular, entonces, un cierto momento “polémico”, dicotomizante, de quiebre, de ruptura, de antagonismo: de señalamiento de una frontera y de un “más acá” y un “más allá” de esa frontera (en eso radica, decíamos, la “herencia de 2001” en el “estilo de conducción” del presidente Kirchner), y un cierto momento “sistémico”, de articulación, de constitución de un “nosotros”, de construcción de una identidad colectiva que pueda verosímilmente aspirar a encarnar los valores de lo “universal” (en eso consiste la “herencia de 2002” en el estilo de actuación de presidente). Kirchner, dijimos, busca –y viene consiguiendo, de modo siempre precario, siempre frágil, siempre inestable: no podría ser de otro modo– recuperar *al mismo tiempo* esas dos dimensiones antitéticas y complementarias de la vida política: la del conflicto, el

¹⁸ Parece importante destacar que el telón de fondo sobre el que, en nuestro país, algunos autores –como Laclau– han vuelto a poner en circulación una discusión *teórica* especialmente sofisticada de este concepto de “hegemonía”, y sobre el que, *asimismo*, se recorta la *empresa política de construcción de una hegemonía novedosa que encarna la actual gestión gubernamental, y que estamos nosotros, en el texto, intentando describir*, está signado por el dato fundamental de un estallido de esas diferencias y particularidades (de una “rebelión del coro”, como decía José Nun, 1989) y de una fragmentación muy marcada de todas las identidades sociales y políticas. Juan Villarreal (1985) advirtió tempranamente sobre la importancia, como telón de fondo del ciclo de la “transición democrática” que en esos años ocupaba de manera casi excluyente a las ciencias sociales argentinas, de este proceso de fragmentación social (de heterogeneización “por abajo” de la sociedad, contracara de su homogeneización, concentración y centralización “por arriba”) como efecto de las políticas económicas implementadas desde la segunda mitad de los 70, y esta tendencia no ha hecho más que profundizarse desde entonces, particularmente como consecuencia de las políticas de reforma estructural desarrolladas durante los 90. A la salida de esa década, diversas investigaciones sociológicas (entre las que se destaca por ejemplo Svampa, 2000) han contribuido a hacernos visible el empobrecido y diversificado “mosaico” de identidades en el que se ha convertido nuestra sociedad. Es esa sociedad, entonces, una sociedad miserabilizada, pero sobre todo diversificada, heterogeneizada, astillada, sin fuertes centros compartidos de referencia (como los que representaban, en el pasado, el mundo del trabajo –la fábrica, el sindicato– o el propio Estado) la que hoy se trata de pensar. Es en relación con esa sociedad que hoy tratamos de recuperar algunas viejas categorías del análisis político como ésta de “hegemonía” que aquí nos ocupa.

antagonismo, la ruptura, y la del orden, el consenso, el sistema.¹⁹ En eso consiste su “populismo”; en eso consiste su “vocación hegemónica”. Y en eso consiste también su propia “promesa”: su promesa de defender los intereses del “pueblo” *que su mismo discurso y su misma práctica de gobierno contribuye a construir* (así, por ejemplo, cuando en su discurso de asunción prometió “no pagar la deuda externa a costa del hambre del pueblo”, o cuando limitó la exportación de carne vacuna para que no subiera su precio en el mercado interno) frente a los que identifica como los intereses de los enemigos de ese pueblo: exportadores, organismos financieros, sectores religiosos o militares, periodistas de derecha o empresarios a los que, conjunta o alternativamente, arroja “más allá” de esa “frontera” *que todo el tiempo dibuja y desdibuja, que todo el tiempo afirma y corre de un lugar a otro*. Esa frontera, sin la cual no hay populismo ni hegemonía ni política, está hecha entonces de *un conjunto de operaciones de distinción y de exclusión*, que le permiten al presidente distinguir, a izquierda y a derecha, hijos y entenados, elegidos y malditos. Distinguir, “hacia la derecha”, entre buenos y malos militares, buenos y malos empresarios (“Señor Coto: póngase a trabajar para el país”), buenos y malos sacerdotes. Y señalar, “hacia la izquierda”, el límite de la protesta tolerable, el límite de la negatividad compatible con el orden. Se ha indicado muchas veces que la contundencia con que el presidente suele formular estas distinciones constituye el signo de un rasgo de carácter poco amigo de los disensos y fuertemente personalista. Sin duda: no hay aquí, como nos decía Landi que había bajo Menem, una “polifonía de voces” diferentes, sino más bien un solista firmemente empeñado en que el conjunto de la orquesta lo acompañe sin desafinar.

¹⁹ Emilio de Ípola (2001) ha desarrollado muy sugerentemente la idea de que estas dos dimensiones de la vida social (que él encuentra expresadas en dos “metáforas” contrapuestas: la de la “revolución” y la del “sistema”) son insuficientes, *consideradas de manera aislada y excluyente*, para dar cuenta de la complejidad de la política, porque la política —explica— supone *siempre* el juego tenso entre ambas.

8. PALABRAS, MOVILIZACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD

A lo largo de este trabajo hemos tratado de sugerir la hipótesis de que la posibilidad de construir un lazo de representación legítimo o —como dijimos— *representativo* está asociado a la aptitud de los políticos o de las élites políticas para articular discursivamente programas, razones y promesas verosímiles y capaces de interpelar exitosamente a la ciudadanía y de generar en ella la confianza y la credibilidad que ese lazo requiere. Advertimos asimismo las dificultades que había tenido entre nosotros la consolidación de ese tipo de vínculos por medio de una palabra política que, después del entusiasmo inicial de los primeros años del ciclo de la “transición”, se vio doblemente sometida a los condicionamientos que le imponían, por un lado, la lógica y los lenguajes de los *mass media* y, por el otro, las exigencias del discurso técnico-económico. *Reconstruir* —después de diciembre y en medio de la crisis— ese espacio de una palabra política tan duramente maltratada era y es un imperativo fundamental en la tarea de rediseñar las coordenadas de un orden político legítimo. Y lo primero que habría que decir, en ese sentido, es que Kirchner ha dado desde el comienzo mismo de su gestión un par de pasos decisivos en este sentido. Por lo pronto, ha conseguido, si no “levantar la marca” que sobre el discurso político venían ejerciendo los medios masivos de comunicación, y sobre todo la televisión, sí por lo menos relativizarla fuertemente, y esto a través del simple expediente de hacer algo que a los políticos argentinos de los últimos años simplemente no se les había pasado por la cabeza: *no ir a la televisión. No ir a la televisión*, y por lo tanto no adoptar, como gramática y como temas obligados de sus discursos, la gramática y los temas que imponen los criterios técnicos, estéticos e ideológicos de la televisión a quienes sí eligen predicar desde ese escenario. En segundo lugar, y de manera quizás todavía más visible, ha dado exitosa continuidad al impulso, iniciado durante la gestión de Duhalde, de emancipar la palabra política del fortísimo corset en la que la había aprisionado el lenguaje

técnico de la economía y de los economistas. En efecto, si desde la segunda mitad de los 80, y en un *crescendo* vertiginoso, los argentinos nos habíamos acostumbrado a escuchar a los políticos esmerarse en imitar la jerga de los economistas y en *pensar* en términos técnico-económicos, a la salida de la crisis de 2001 el lenguaje de la política parece haber reconquistado una saludable autonomía frente al de los economistas, e incluso llama la atención oír ahora a éstos articular sus ideas en un lenguaje menos técnico y más *político* que nunca.

En tercer lugar, Kirchner ha dicho algunas cosas. Algunas *palabras*. Dijo, verbigracia, “proyecto nacional”; dijo “oligarquía”; dijo “ejército sanmartiniano”; dijo, en nombre del Estado, “perdón”. Dijo –le dijo al General Bendini– “proceda”. Son palabras fuertes, contundentes. Que armaron revuelo y le ganaron enemigos. Que recortan un campo de pertenencia y designan con mucha nitidez la existencia de un “afuera”, de un “más allá” –como decíamos recién– de la frontera, del *límite*, de ese campo de pertenencia. Que, por así decir, “marcan la cancha”. En ese modo de *marcar la cancha* radica sin duda una de las originalidades del “estilo de conducción” del presidente Kirchner, y una de las que permite sin duda inscribir ese estilo de conducción dentro de la tradición populista a la que nos referíamos hace un momento: de este lado, el pueblo; de aquél, los enemigos del pueblo. Es claro que esto (este componente conflictivista, dictotomizante, propio del pensamiento populista) molesta y enoja. Kirchner *dice* algo que incomoda: dice que hay conflictos irreductibles; dice que hay enemigos del pueblo. Es claro, también, que genera adhesiones igualmente comprensibles, sin duda nada despreciables en el esfuerzo del presidente por volver *legítimo, creíble, representativo* (como decíamos) su liderazgo. Un liderazgo del que sería posible incluso preguntarse si no se acerca mucho al característico de las que Guillermo O’Donnell, en un texto ya muy conocido, ha propuesto llamar “democracias delegativas”: democracias fuertemente mayoritarias (O’Donnell, 1997: 294) basadas en la *confianza* de un pueblo hacia un determinado dirigente, al que ese pueblo prefiera ungrir con una

amplia *autorización* para actuar como intérprete de sus intereses –y conductor, agregamos nosotros, de la lucha contra aquellos *enemigos* de tales intereses– a mantener bajo la vigilancia de mecanismos institucionales de control. Así, un nuevo parentesco conceptual se insinúa frente a nuestros ojos: el que parece posible encontrar entre la idea de O’Donnell de *democracia delegativa* (un tipo de democracia, entonces, que es menos *republicana*, pero no menos, sino más, *democrática* que la democracia representativa con la que O’Donnell la compara) y la categoría de *populismo* de la que nos veníamos sirviendo. Pero volvamos –porque es hora de concluir– a la cuestión de las palabras.

Sobre ellas, sobre las palabras que Kirchner ha pronunciado a lo largo de estos años, Horacio González ha escrito que se trata, en muchas ocasiones, de palabras carentes “de holgura crítica y profundización conceptual”. Que Kirchner usa las palabras para “marcar la cancha”, como decíamos, y que lo hace con indudable eficacia, pero también un tanto levemente, y que eso no es bueno. Que no es bueno, por ejemplo, que el presidente diga “Jauretche” como “un mero guiño regionalista”, un “fetichismo de circunstancia” dirigido a viejos conmlitones. O que diga “ejército sanmartiniano” sin “excavar con más pertinencia y dedicación en ese concepto”. O que le haga bajar a Bendini –con ese “proceda” al que nos referíamos– el cuadro de un dictador *que sin duda había que hacer bajar*, pero permitiendo que un acto tan importante como ése “para recimentar la vida democrática nacional” quede desprovisto de fundamentos más sólidos, como “en el aire”, por “falta de una discursividad adecuada y omisión de un debate profundo” (González: 31s). Aquí, en este último ejemplo, la palabra –una palabra que es una orden seca, tajante, breve– parece reducida a su expresión mínima. Es casi un puro gesto, un mero índice de autoridad. Significativo, sin duda, para señalar y reafirmar esa misma autoridad en un contexto político en que eso parecía decisivo. *Pero insuficiente*, e incluso, acaso, contraproducente. Porque, ¿cómo evitar, en efecto, que esa palabra-gesto, que esa palabra-orden (que era además *justamente esa palabra: “proceda”*, que a lo largo de la his-

toria política y militar argentina se ha utilizado tantas veces, en tantos contextos, para ordenar que se proceda a hacer *tantas cosas diferentes*), quedara, como dice González, como flotando en el aire, falta del anclaje que le habrían dado *otras palabras*, más elaboradas, que podrían y deberían haberla acompañado, y a merced por lo tanto de los vientos más variados. Sin ir más lejos: la misma noche del día en que Kirchner la pronunció frente a Bendini, Gerardo Sofovich abrió su emisión del clásico *Polémica en el bar* sentado en la mesa del mítico cafetín televisivo y pronunciando con pomposa seriedad esa misma palabra: “Proceda”. A esa voz de mando, el talentoso Oscar González Oro se subió a un banquito y descolgó de la pared un cartel conteniendo alguna disposición municipal. De esa manera, el importante gesto de afirmación de la autoridad presidencial frente al ejército argentino ensayado en el Colegio Militar era ridiculizado pocas horas más tarde, en uno de los programas más populares de la televisión argentina, por los exponentes de la derecha más grotesca y más convencional. Lo que aquí importa subrayar es que lo que había vuelto posible esa ridiculización era, como Horacio González dice con toda razón, *que ese gesto, esa pura palabra-gesto del presidente de la nación, no había sido acompañada por otras palabras que la enmarcaran y la llenaran de sentido*, y volvieron imposible, de ese modo, esa manipulación.

Sin palabras –podríamos entonces concluir–, “a los gestos se los lleva el viento”. Cierto. Pero no sería menos cierta la observación de que a las *puras palabras*, por mejor y más graciosamente que estén articuladas, *también puede llevarse el viento* (como vimos, hay ejemplos particularmente dramáticos de ello en la política argentina de los años de la transición) cuando esas palabras no entran por su parte en diálogo con la fuerza de una movilización popular que las recoja, que las asuma o las discuta o las rechace y les oponga otras, o las tuerza hasta hasta hacerlas decir lo que ella quiere que le digan: que –como decíamos más arriba– las “tome” y las ponga a funcionar sobre el suelo firme de la Historia. Hemos visto en estas páginas el modo en que esa movilización popular, que acompañó y hasta fue es-

timulada a acompañar los primeros pasos del ciclo de la “transición”, fue luego, no sólo fuertemente defraudada, sino militantemente desestimulada, desde la cima misma del aparato del Estado, y hemos comentado también la manera en que, desde fines de los años ochenta hasta el comienzo mismo del presente siglo, la política se desarrolló en la Argentina en un contexto de fuerte *desmovilización* popular, frente a una ciudadanía pasiva y muda, resignada y escasamente interesada en participar en los asuntos públicos. De ese modo –dijimos– el “mix” liberal-democrático que había caracterizado el tipo de sistema político que el ciclo de la transición había definido como su “puerto de arribo” iba definiendo un perfil cada vez más decididamente liberal, anti-participativo, y anti-democrático. Hemos visto también la manera en que las fuertes protestas sociales que se habían ido incubando en la Argentina a lo largo de esos años 90, se profundizaron hacia fines de esa década, estallaron de manera espectacular en las jornadas de diciembre de 2001 y no dejaron, desde entonces, de manifestarse de los modos más diversos, *reintrodujeron, cierto que de manera más bien desordenada* (“silvestre”, decíamos), *esa vocación participativa, esa movilización popular*. El actual gobierno oscila entre el aliento y el desaliento –que dosifica cuidadosamente– de esa movilización popular, y en esa oscilación, dijimos, radica el difícil arte de la construcción política que ensaya. Más allá de la suerte que lo asista en este intento, digamos que la cuestión fundamental en la política argentina es hoy la cuestión del modo o de los modos en que puede procesarse la tensión entre la propensión participativa (conflictivista, contestataria, demandante) de la ciudadanía y la vocación (“sistémica”, digamos) de reconstrucción de un orden político representativo. Es sólo a través de esa tensión, por medio de esa tensión, *y en la medida en que esa tensión nunca termina de resolverse del todo*, que es posible pensar la construcción de un orden político legítimo, de una representación –como decíamos más arriba– representativa.

Referencias bibliográficas

- Aboy Carlés, Gerardo (2005), "Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación", en *Estudios Sociales* N° 28, UNL, Santa Fe, primer semestre, pp. 125-49.
- Aboy Carlés, Gerardo (2006), "Populismo y democracia", en VVAA, *Debate sobre el populismo*, Instituto del Desarrollo Humano, UNGS, pp. 5-8.
- Annunziata, Rocío, MAURO, Sebastián y SLIPAK, Daniela (2006), "Blumberg y el vínculo representativo. Liderazgos de opinión en la democracia de audicencia", en Cheresky, Isidoro, *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*, Miño y Dávila, Buenos Aires, pp. 143-172.
- Arendt, Hannah (1993), *La condición humana*, Paidós, Buenos Aires.
- Catanzaro, Gisela (2004), "Nación, imaginación y materia: para una crítica de las comillas", en Vernik, Esteban (comp.), *Qué es una nación. La pregunta de Renan revisitada*, Prometeo, Buenos Aires.
- Cheresky, Isidoro (2003), "Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel (comps.), *De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Las elecciones en Argentina, 1999-2001*, Homo Sapiens, Rosario, pp. 19-51.
- Cheresky, Isidoro (2004), "Elecciones fuera de lo común. Las presidenciales y legislativas nacionales del año 2003", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel (comps.), *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*, Homo Sapiens, Rosario, pp. 21-54.
- De Certeau, Michel (1995), *La toma de la palabra y otros escritos políticos*, Universidad Iberoamericana – ITESO, México.
- Fazio, Horacio (coord.) (2002), *La política en discusión*, Flacso/Manantial, Buenos Aires.
- Gargarella, Roberto (1995), *Nos, los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo*, Miño y Dávila – CIEPP, Buenos Aires.
- González, Horacio (2004), "Cimientos de la nación", en *Lezama* N° 2, Buenos Aires, mayo, pp. 29-32.
- Laclau, Ernesto (2005), *La razón populista*, FCE, Buenos Aires.
- Landi, Oscar (1992), *Devórame otra vez. Qué hizo la televisión con la gente, qué hace la gente con la televisión*, Planeta, Buenos Aires.
- Landi, Oscar (1998), *Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política*, Puntosur, Buenos Aires.
- Landi, Oscar (2000), "La política, en ese azul de frío", en *Clarín*, Suplemento "Zona", 9 de abril, p. 12.
- Landi, Oscar (2002), "La política en su corralito", en *Clarín*, Suplemento "Zona", 6 de enero, p. 2.
- Mocca, Edgardo (2002), "Defensa de la política (en tiempos de crisis)", en Novaro, Marcos (comp.), *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*, Norma, Buenos Aires, pp. 253-88.
- Mocca, Edgardo (2004), "Los partidos políticos: entre el derrumbe y la oportunidad", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel (comps.), *¿Qué cambió...?*, pp. 83-106.
- Morgan, Edmund S. (2006), *La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos, Siglo XXI*, Buenos Aires.
- Nun, José (1987), "La teoría política y la transición democrática", en Nun, José y Portantiero, Juan Carlos, *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Puntosur, Buenos Aires, pp. 15-56.
- Nun, José (1989), "La rebelión del coro", en su *La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- Nun, José (1991), "La democracia y la modernización, treinta años después", trabajo presentado al XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de ciencia Política, Buenos Aires, 21 al 26 de julio.
- Nun, José (2000), *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, FCE, Buenos Aires.
- O'Donnell, Guillermo (1997), *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós, Buenos Aires.
- O'Donnell, Guillermo (2000), "La muerte lenta" (entrevista de Horacio Verbitsky), en *Página 12*, 15 de octubre, pp. 12-13.
- O'Donnell, Guillermo (2001), "La democracia está en un proceso de muerte lenta" (entrevista de Vicente Muleiro), en *Clarín*, suplemento "Zona", 22 de setiembre, pp. 4-5.
- Rancière, Jacques (1996), *El desacuerdo. Política y filosofía*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- Pateman, Carole (1985), *The problem of political obligation. A critique of liberal theory*, University of California Press, Berkeley, Los Ángeles.
- Pousadela, Inés (2004), "Los partidos políticos han muerto. ¿Larga vida a los partidos!", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel, *¿Qué cambió...?*, cit. *supra*.

- Schuster, Fererico, Naishat, Francisco, Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián [comps.] (2005), *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Prometeo, Buenos Aires.
- Svampa, Maristella (2000), *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, UNGS-Biblos, Buenos Aires.
- Svampa, Maristella (2003) "El análisis de la dinámica asamblearia. Dos estudios de caso. Las asambleas de Palermo y de Villa Crespo", en I. González Bombal (comp.), *Nuevos Movimientos Sociales y ONGs en la Argentina de la crisis*, Cedes, Buenos Aires, pp. 21-46.
- Svampa, Maristella (2003) *La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Taurus, Buenos Aires.
- Vilas, Carlos María (2004), "Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del neopopulismo latinoamericano", en *Estudios Sociales* N° 26, UJNL, Santa Fe, primer semestre, pp. 27-51.
- Villarreal, Juan (1985), "Los hilos sociales del poder", en E. Jozami, P. Paz y J. Villarreal, *La crisis de la dictadura argentina*, Puntosur, Buenos Aires.
- Vommaro, Gabriel (2003) "Lo que quiere la gente". Los sondeos de opinión pública como herramienta política. El caso de las elecciones nacionales de 1999", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel, *De la ilusión...*, cit. *supra*, pp. 75-115.
- Vommaro, Gabriel (2006) "Cuando el pasado es superado por el presente: las elecciones presidenciales de 1983 y la construcción de un nuevo tiempo político en la Argentina", en A. Pucciarelli (comp.), *Los años de Alfonsín ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 245-88.